



Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú

Lineamientos para una
efectiva implementación
en la República Argentina



Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible
Argentina



Autoridades

Presidente de la Nación
Alberto Fernández

Vicepresidenta de la Nación
Cristina Fernández de Kirchner

Jefe de Gabinete de Ministros
Agustín Rossi



**Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible**

**Ministro de Ambiente
y Desarrollo Sostenible
Juan Cabandié**

**Jefe de Unidad de Gabinete
de Asesores
Juan Manuel Vallone**

**Secretaria de Cambio Climático,
Desarrollo Sostenible e
Innovación
Cecilia Nicolini**



Equipo técnico

Coordinación general
Jessica Motok

Coordinación técnica
María Fernanda Ruano

Redacción
Soledad González Arismendi
Carolina Guerra Navarro

Corrección editorial
Valentina Bona
Agustina Gimbatti

Prólogo

América Latina y el Caribe es una tierra de lucha por los derechos humanos. Tenemos la búsqueda incansable de Memoria, Verdad y Justicia de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo. El legado de Berta Cáceres, que dio la vida en defensa del pueblo lenca y del cuidado del agua en Honduras. La lucha de Rigoberta Menchú por los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala, que le valió nada más y nada menos que un premio Nobel de la Paz. O la historia de Chico Mendes, que protegió hasta el último de sus días un pulmón de nuestro planeta como es la Amazonía. Y tenemos un tratado que rinde homenaje a esas historias y nos pone a la vanguardia de los debates ambientales en el mundo: el Acuerdo de Escazú.

Escazú es un instrumento jurídico pionero, que concibe a la transición al desarrollo sostenible como una urgencia en la región, pero también, como un desafío que implica afrontar más de 500 años de desigualdad.

El Acuerdo de Escazú nos compromete con el acceso pleno y efectivo a la información, la participación pública en la toma de decisiones, el acceso a la justicia y la protección de quienes defienden a la Madre Tierra.

Nuestro país viene dando pasos importantes para convertir los compromisos de este tratado en acciones concretas. A nivel regional, fuimos anfitriones de la Segunda Reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo, donde recibimos a 23 delegaciones y más de 350 participantes, y elegimos a las y los siete integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo.

Y a nivel nacional, con la participación y el aporte de la sociedad como bandera, diseñamos esta hoja de ruta para una implementación plena y efectiva del Acuerdo. Lo hicimos a través de una consulta pública, diez espacios de formación para equipos de Gobierno, cinco instancias colaborativas sobre el concepto de "participación temprana", cinco encuentros virtuales, cuatro mesas de diálogo regionales y un buzón virtual de propuestas.

Este Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú es reflejo de un compromiso genuino de la Argentina con la agenda ambiental. Cada uno de los 24 lineamientos y las 73 acciones que lo conforman son fruto de un proceso de diálogo en el que confluyen las voces de distintas áreas del gobierno, organizaciones civiles, el sector académico, el sector privado, los sindicatos y el público en general.

Es un plan que, a 40 años del retorno de nuestra democracia, nos une para trabajar por una vida digna, saludable, con desarrollo sostenible y con paz para nuestro pueblo. Una verdadera democracia ambiental.

Cecilia Nicolini
Secretaria de Cambio Climático,
Desarrollo Sostenible e Innovación

Índice

Introducción y antecedentes	10
Acciones de implementación nacional a la fecha	12
Proceso para la construcción del plan	18
Estadío de cumplimiento del acuerdo en nuestro país	19
Principales oportunidades de mejora identificadas	21
Estrategia de participación pública para la construcción del plan y resultados obtenidos	22
Integración de los resultados de la estrategia de participación pública al plan	29
Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú	32
Acceso a la información pública ambiental	33
Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales	39
Acceso a la justicia en asuntos ambientales	41
Defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales	42
Creación y fortalecimiento de capacidades	43
Gobernanza para la implementación del Acuerdo de Escazú	48
Gobernanza para la implementación del Acuerdo de Escazú	50
Gabinete Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú	51
Sistema de gobernanza	52
Consideraciones finales	58
Agradecimientos	60
Siglas y acrónimos	62
Bibliografía	64

Introducción y antecedentes

Introducción y antecedentes

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (en adelante, **Acuerdo de Escazú**) encuentra sus fundamentos en el Principio 10¹ de la **Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo** de 1992 y, con la **Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo en América Latina y el Caribe** en el año 2012, comienza a transformarse en una realidad. Allí se destaca la importancia de asegurar que toda persona tenga acceso a la información, participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales, de modo de garantizar el derecho a un ambiente sano y sostenible.

En 2018, luego de un proceso de seis años de preparaciones y negociaciones, 24 países de la región suscribieron el Acuerdo en la ciudad de Escazú, Costa Rica. En el año 2021, con las ratificaciones de la República Argentina y México, entró en vigor, y actualmente son 15 los países que lo han ratificado. Este acuerdo establece que el Estado debe asumir una serie de obligaciones para la implementación efectiva de los derechos de acceso a la información pública ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y a la justicia en asuntos ambientales, además de asegurar un entorno propicio para aquellas personas y grupos que defienden derechos humanos en asuntos ambientales.

El acuerdo se ratificó en el Congreso nacional en 2021 mediante la Ley n.º 27566. A partir de su entrada en vigor, nuestro país, a través de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación (SCCDSel), del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, ha avanzando firmemente en su implementación. En este sentido, el esfuerzo sostenido en las acciones de gestión hacia su efectivo cumplimiento se enmarca en un compromiso claro de política pública que pone a los derechos de acceso como una prioridad del Estado.

Como fruto de un proceso colaborativo liderado por el sector público y abierto a la participación de diversos actores y sectores, se presenta el **Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú en la República Argentina**. Aquí se establecen las acciones prioritarias a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, como inicio de un recorrido que involucra compromisos de diversas áreas del Estado, a fin de garantizar los derechos de acceso en asuntos ambientales.

Para este recorrido, se consolidaron **6 ejes, 24 lineamientos y 73 acciones** interrelacionados, como puede verse en la Figura 1.

1. El Principio 10 establece: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes” (Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992).

Figura 1.
Ejes del Plan Nacional para la
Implementación del Acuerdo de Escazú



- ▶ **Lineamientos:** incluyen las pautas o temas generales de acción.
- ▶ **Acciones:** son actividades puntuales que tienen viabilidad técnica, administrativa y financiera de ejecución y que han surgido como prioritarias en los resultados de la estrategia de participación pública.
- ▶ **Indicadores:** se incluyen indicadores cualitativos y cuantitativos de cumplimiento, sea para una o varias acciones propuestas, a fin de facilitar su seguimiento.
- ▶ **Área/s responsable/s:** son aquellas dependencias u organismos responsables de la ejecución de las acciones, que estarán a cargo de determinar plazos internos de cumplimiento acorde a las propias capacidades.

Cabe aclarar que los Pueblos Indígenas de nuestro país han sido representados en distintas instancias de trabajo a través de la participación individual de personas pertenecientes a determinadas comunidades, no así de manera colectiva. Atendiendo a que el sistema de derechos indígenas y sus mecanismos de participación en la toma de decisiones requieren de procesos colectivos específicos y plazos más extensos que en otros sectores, el presente plan prevé un lineamiento de trabajo exclusivo para el abordaje de las disposiciones del acuerdo junto a Pueblos y Comunidades Indígenas, en articulación con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

En virtud de que la implementación del Acuerdo de Escazú debe considerarse un proceso gradual y progresivo, para este plan se ha propuesto un alcance temporal de tres años de cumplimiento, con el fin de que los lineamientos y acciones de gestión sean definidos y realizables, de acuerdo a las capacidades nacionales. A su vez, su elaboración en contexto de año electoral propone acciones que tienden puentes entre dos ciclos de gestión gubernamental. Se espera que los avances realizados entre 2021 y 2023 sean sostenidos como política de Estado, en el marco del compromiso regional asumido como país perteneciente a Latinoamérica y el Caribe. Por lo tanto, se sugiere que, a posteriori, se construyan nuevos planes, que puedan ser de frecuencia bianual, mostrando avances concretos de cumplimiento y un seguimiento cercano por parte de la ciudadanía.

En relación con los organismos públicos responsables de la implementación del plan, es importante aclarar que se ha incluido únicamente la Administración Pública Nacional del Poder Ejecutivo, respetando la independencia de poderes prevista por la Constitución Nacional, así como el marco federal de gobierno de la República Argentina. Aquellas propuestas recibidas en la estrategia de participación que pudieran ser de competencia de otros poderes, como el Legislativo o el Judicial, o bien de las jurisdicciones subnacionales, han quedado reflejadas en el documento denominado Propuestas Ciudadanas para la Implementación del Acuerdo de Escazú: resultados de la estrategia de participación 2023. Se invita a las personas interesadas a su lectura detallada.

Acciones de implementación nacional a la fecha

Luego de la ratificación por parte del Gobierno de la República Argentina —el 22 de enero de 2021—, mediante la Ley n.º 27566, en 2022 la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación fue designada punto focal en la órbita del Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible de la Nación. Desde este rol, se pusieron en marcha una diversidad de líneas de trabajo con el fin de avanzar en la implementación progresiva pero efectiva del Acuerdo de Escazú.

Como primer paso, entre los meses de agosto de 2022 y enero de 2023, se realizó un **diagnóstico** para identificar en qué estadio de cumplimiento del acuerdo se encontraba el país. Este proceso incluyó un análisis normativo a nivel nacional y provincial, junto con entrevistas a actores clave del ámbito público nacional, organizaciones de la sociedad civil, universidades y representantes del sector privado (ver II.1. Estadío de cumplimiento del acuerdo en nuestro país, para más detalle sobre este análisis).

Si bien la República Argentina cuenta con una amplia trayectoria y un marco normativo robusto en el reconocimiento de los derechos de acceso (acceso a información pública ambiental, participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales), el diagnóstico arrojó una serie de áreas en las que sería posible mejorar (ver II.2. Principales oportunidades de mejora identificadas), algunas de las cuales se evidenciaron como prioritarias, por lo que se consideró que requerían de un abordaje a corto plazo.

La primera línea de acción que se abordó fue el diseño de una **estrategia de creación y fortalecimiento de capacidades** destinada a personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, con el fin de dotar a autoridades y equipos técnicos de las capacidades necesarias para una efectiva implementación del Acuerdo de Escazú. En este marco, entre 2022 y 2023 se realizaron:

- Siete encuentros de capacitación para representantes del Gobierno nacional. Los temas abordados fueron: introducción al Acuerdo de Escazú y sus pilares; herramientas para la facilitación de procesos participativos; derechos indígenas y la vinculación entre el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú. Participaron funcionarias, funcionarios y equipos técnicos de los Ministerios Nacionales de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Justicia y Derechos Humanos y Transporte, de las Secretarías de Minería, Innovación Pública y Energía, y de la Defensoría del Pueblo de la Nación, entre otros.
- Cinco encuentros de formación para equipos de Gobiernos provinciales y locales (provincias de Buenos Aires, Tucumán, Misiones, La Pampa). Los temas abordados fueron: introducción al Acuerdo de Escazú y sus principales pilares, trabajo colaborativo sobre acceso a la información ambiental y participación pública.
- Una edición del curso virtual “Introducción al Acuerdo de Escazú”, del que participaron trabajadoras y trabajadores de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) de todo el país.



En el ámbito regional, por su parte, se puso en marcha el proyecto de cooperación bilateral Fortalecimiento de las capacidades para la implementación del Acuerdo de Escazú en Argentina y México, que tiene por objetivo realizar actividades de intercambio y cooperación para la implementación plena del Acuerdo de Escazú en ambos países.

Paralelamente, en el marco del **Quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto** (2022-2024), la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación presentó el compromiso *Participación pública en la toma de decisiones ambientales en el marco de la implementación del Acuerdo de Escazú en Argentina*². Este compromiso se propone generar las condiciones necesarias para avanzar en una participación federal amplia en los procesos de toma de decisiones ambientales desde sus instancias iniciales (Argentina, Jefatura de Gabinete de Ministros, 2022).

Entre sus hitos a cumplir hacia diciembre de 2024, se encuentran: construir de forma colaborativa el concepto de participación temprana en asuntos ambientales; divulgar información relacionada a los derechos de acceso a través de una página web; publicar un curso virtual sobre el Acuerdo de Escazú para equipos de la administración pública; publicar un curso virtual sobre el Acuerdo de Escazú para público en general, e impulsar la creación de una red federal para la implementación del Acuerdo de Escazú, con representantes locales del ámbito público y de la sociedad civil. A la fecha, algunos de estos hitos ya se cumplieron, mientras que otros se encuentran en proceso de concreción. Se puede realizar un seguimiento público de los avances desde el sitio web: <https://metas.argentina.gob.ar/>.

El primer hito del compromiso que se cumplimentó fue el lanzamiento de un sitio web específico sobre el Acuerdo de Escazú en la Argentina (<https://www.argentina.gob.ar/ambiente/acuerdo-de-escazu>), que contiene información de interés y una actualización permanente de las acciones de implementación en marcha. También se puede acceder a información sobre la normativa y los dispositivos gubernamentales que existen en las 24 jurisdicciones del país para el ejercicio de los derechos de acceso en asuntos ambientales.

En segundo término, con el objetivo de avanzar en el fortalecimiento y formalización de espacios participativos desde instancias iniciales del diseño de las políticas públicas, se puso en marcha un proceso colaborativo de construcción de las bases conceptuales de la noción de participación temprana y de elaboración de orientaciones para su efectiva aplicación en los procesos de toma de decisiones ambientales. A este fin, se realizaron cinco encuentros con diferentes actores clave buscando delimitar alcances, límites, desafíos y oportunidades de una participación temprana en asuntos ambientales. En este proceso participaron un total de 139 personas, representantes del Gobierno nacional y de Gobiernos provinciales, de organizaciones de la sociedad civil, de universidades y de cámaras y asociaciones empresariales. Las conclusiones de este proceso se someterán a una consulta pública virtual como última instancia de recepción de aportes para la elaboración de orientaciones para quienes toman decisiones ambientales.

Finalmente, en el ámbito regional, la República Argentina ejerce una de las cuatro vicepresidencias de la Mesa Directiva de la Conferencia de las Partes (COP) del acuerdo, función asumida en el marco de la primera reunión de la COP, realizada en abril de 2022 en Santiago, Chile.

2. El compromiso Participación pública en la toma de decisiones ambientales en el marco de la implementación del Acuerdo de Escazú en Argentina se encuentra disponible en el Quinto Plan de Acción de Gobierno Abierto (véase [en línea] nube.innovacion.gob.ar/s/iiPkGMRPppScXsj)

Asimismo, la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación ha sido participante activa de los Foros Anuales sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe, tanto en su primera edición (Quito, Ecuador, noviembre de 2022) como en la segunda (Panamá, Panamá, septiembre de 2023).

Segunda reunión de la Conferencia de las Partes

Con el apoyo activo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su carácter de Secretaría Ejecutiva del Acuerdo a nivel regional, la Argentina fue anfitriona y ejerció la presidencia de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, realizada entre el 19 y el 21 de abril de 2023 en Buenos Aires.

Este encuentro tuvo como objetivo impulsar avances para la puesta en marcha de este tratado en la región, y contó con la participación de 15 delegaciones de Estados Parte, ocho delegaciones de países observadores, 357 representantes del público, 110 delegadas y delegados de gobierno, 74 representantes de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales (con más de 600 personas asistentes acreditadas en total).

Como resultados principales de la reunión, se pueden destacar los siguientes.

Se eligieron a las y los siete integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, un órgano consultivo que tiene como misión promover y asistir a los países en la implementación del tratado en sus territorios.

Se aprobó la Declaración de Buenos Aires, una declaración política donde se destaca el papel de los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en la promoción de los derechos humanos y del desarrollo sostenible.

Argentina, Chile, Ecuador, México, Santa Lucía y Uruguay presentaron acciones para elaborar una hoja de ruta para la implementación del acuerdo en esos países.

Se anunció la puesta en marcha del Fondo de Contribuciones Voluntarias.

En tal ocasión, además, se anunció la creación del Observatorio sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe en la órbita del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos.



Actualmente, la República Argentina busca consolidar y dar proyección temporal al recorrido iniciado tras la ratificación del acuerdo, con la construcción de este Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú, que integra recomendaciones surgidas del diagnóstico, acciones diseñadas por organismos del Estado nacional y aportes de la sociedad civil, el sector académico y el sector privado.

El presente documento contiene, en los siguientes capítulos, una descripción del camino recorrido para llegar a la construcción del plan; los lineamientos, acciones e indicadores para avanzar en el cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo de Escazú, y una propuesta de gobernanza para la implementación y seguimiento de las acciones definidas, que incluya la participación de actores del sector social, privado y académico. Por último, se incluyen las conclusiones y pasos a seguir, considerando el contexto coyuntural.

Figura 2.
Cronología de la implementación del acuerdo en Argentina



Proceso para la construcción del plan

Proceso para la construcción del plan

En sintonía con el espíritu y los mandatos que emergen del Acuerdo de Escazú, la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación se planteó un camino que incluya tanto instancias de trabajo interno como instancias abiertas a la participación de la ciudadanía. La participación es un proceso que canaliza las inquietudes y perspectivas de las ciudadanas y los ciudadanos para que sean consideradas en la toma de decisiones gubernamentales. Pero, sobre todo, constituye un derecho y el Estado tiene el deber de generar espacios para ejercerlo.

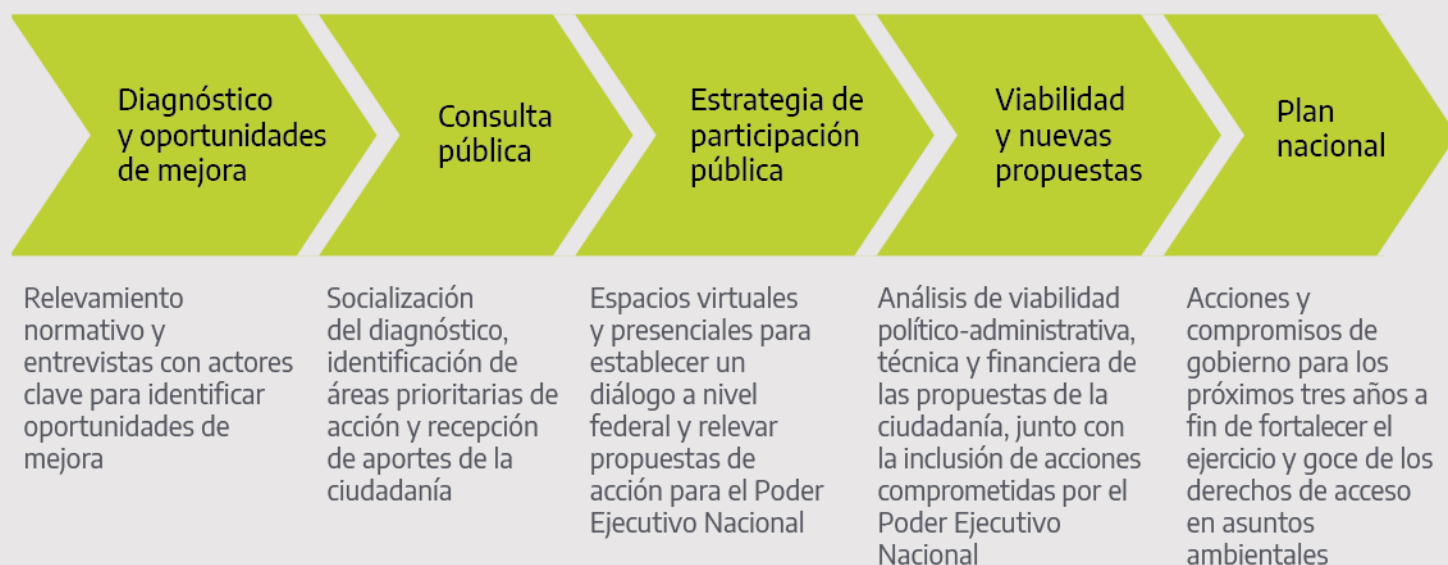
Este recorrido se diseñó en **dos etapas**: la primera, orientada a analizar en qué estadio de cumplimiento del acuerdo se encontraba el país y a identificar áreas de mejora prioritarias; la segunda, enfocada en diseñar mecanismos para una adecuada gobernanza del acuerdo y a construir colaborativamente este plan nacional.

Este sendero de construcción del plan se nutre de **tres fuentes fundamentales**:

- ▶ El diagnóstico realizado en 2022 sintetizado en los documentos: **Resumen del diagnóstico** sobre el estado de cumplimiento nacional de las disposiciones del Acuerdo de Escazú y **Resumen de las recomendaciones** de acción derivadas del diagnóstico sobre cumplimiento del Acuerdo de Escazú en Argentina, que fue acompañado por una priorización de acciones producto de la consulta pública.
- ▶ Propuestas de acción realizadas por organismos del Poder Ejecutivo Nacional que tienen competencias sustantivas vinculadas al cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo de Escazú.
- ▶ Resultados de la estrategia de participación pública que han quedado documentadas en el informe de **Propuestas Ciudadanas para la Implementación del Acuerdo de Escazú: resultados de la estrategia de participación 2023**.

En las siguientes secciones se profundiza en cada uno de los pasos de construcción del plan.

Figura 3.
Ruta para la construcción del plan nacional



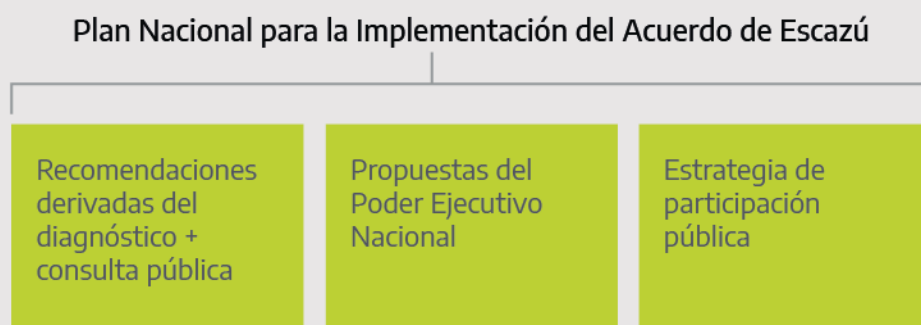
Estadío de cumplimiento del acuerdo en nuestro país

Entre agosto de 2022 y enero de 2023, se llevó a cabo un análisis **diagnóstico** sobre el estado de implementación de las disposiciones del Acuerdo de Escazú en la Argentina, el cual incluyó un exhaustivo análisis normativo a nivel nacional y provincial. Además, se realizó una identificación preliminar de actores clave del ámbito público nacional, organizaciones de la sociedad civil, universidades y representantes del sector privado, y se realizaron 31 entrevistas, de las que se obtuvo información de primera mano sobre el ejercicio de los derechos de acceso y sobre las oportunidades y desafíos que se nos presentan para su plena garantía. Este análisis fue consolidado en un informe de diagnóstico, que también incluyó algunos insumos preliminares para la identificación de áreas prioritarias de mejora y la propuesta de acciones que permitieran abordarlas.

Seguidamente, durante noviembre y diciembre de 2022 se realizó una **consulta pública** a través de la plataforma provista por la Secretaría de Innovación Pública, a fin de socializar los principales resultados de la línea de base y recibir los primeros aportes de la ciudadanía a las propuestas de gobernanza y a las recomendaciones vinculadas a los distintos pilares del acuerdo. La difusión de este proceso se realizó vía correo electrónico a más de 12 000 contactos de la SCCDSel, junto con publicaciones en las redes sociales del MAYDS. El alcance de dicha instancia fue nacional y abierta a todo público, con un resultado de 2579 usuarios que visitaron la web en todo el país y un total de 75 comentarios organizados en seis ejes temáticos, realizados por 47 participantes, durante 21 días corridos.

Figura 4.

Fuentes de aportes para la elaboración del plan



La consulta ofreció un espacio para comentarios clasificados en ejes temáticos y un sistema de votación para priorizar recomendaciones de acción surgidas de la línea de base. Los ejes temáticos establecidos fueron los siguientes: gobernanza para la implementación del Acuerdo de Escazú; creación y fortalecimiento de capacidades; acceso a la información pública ambiental; participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales; acceso a la justicia en asuntos ambientales y personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. El informe de cierre se encuentra publicado en el portal de Consulta Pública de la Secretaría de Innovación Pública³ y constituye la primera base para la elaboración del presente plan.

Con estos insumos y de cara a la construcción de este plan, durante el primer trimestre de 2023, se profundizó el **mapeo de actores** iniciado, llegando a identificar 354 actores —categorizados según jurisdicción, organización de pertenencia, categoría de actor—. A su vez, se diseñó la propuesta de conformación del **Gabinete Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú** y de un sistema de gobernanza amplio mediante el cual la sociedad civil, el sector académico, el sector privado, organizaciones locales y otros puedan vincularse a la implementación del Acuerdo de Escazú en el país.

Paralelamente, durante el primer semestre de 2023, la Argentina diseñó e implementó una **estrategia de participación pública**, a fin de que este plan fuera elaborado en forma transparente y con la significativa participación del público, obteniendo así mayores niveles de legitimidad y adhesión, tanto entre los actores interesados como en el público en general. La ejecución de la estrategia culminó en agosto de 2023 y toda la información sobre estas acciones y demás temas vinculados a la implementación del Acuerdo de Escazú en la Argentina pueden consultarse en www.argentina.gob.ar/ambiente/acuerdo-de-escazu.

3. Para la consulta pública se elaboró un resumen para público no experto de la línea de base y las recomendaciones. A su vez, al finalizar, se publicó un informe de cierre de la consulta donde se analizan los principales resultados. Todos los comentarios recibidos se encuentran disponibles en línea para su visualización. Véase [en línea]: consultapublica.argentina.gob.ar/acuerdo-escazu.

Principales oportunidades de mejora identificadas

A continuación se sintetizan las principales áreas de mejora identificadas en el diagnóstico. Cabe resaltar que, durante la implementación de la estrategia de participación pública, muchos de estos aspectos también emergieron como necesidades y vacancias que requieren de un abordaje específico.

En relación al **acceso a la información pública ambiental**, desde un análisis de la normativa vigente, se identifican áreas de mejora vinculadas a:

- ▶ la aplicación del principio de máxima publicidad y la entrega de información de manera proactiva;
- ▶ la existencia de mecanismos que faciliten el acceso a la información ambiental a personas y grupos en situación de vulnerabilidad, así como la generación de información en formatos comprensibles para estos grupos;
- ▶ la entrega de información ambiental en el formato requerido por la persona solicitante siempre que esté disponible (sin perjuicio de la Ley n.º 27275 de Acceso a la Información Pública, que prevé la entrega de información en formatos digitales abiertos);
- ▶ la notificación a la persona solicitante, con la máxima celeridad posible, de que la autoridad no posee la información requerida, junto con la indicación sobre qué autoridad pudiera tenerla;
- ▶ la implementación de un registro de emisiones y transferencia de contaminantes y el desarrollo de acciones de fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana, que atiendan los desafíos de su integración federal;
- ▶ la realización de evaluaciones independientes de desempeño ambiental;
- ▶ respecto a los informes de sostenibilidad, se identificó como una herramienta habitualmente implementada por las grandes empresas, no así por las más pequeñas, que carecen de conocimiento y recursos para llevarlas adelante, y
- ▶ en relación a la información destinada a las consumidoras y los consumidores, la Ley n.º 27642 de Promoción de la Alimentación Saludable⁴ prevé información sobre la salud, pero no contiene previsiones sobre cualidades ambientales.

A fin de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 5 del Acuerdo de Escazú, se evidencia una ventana de oportunidad para avanzar en un proceso de adecuación de la normativa existente sobre la base de: los principios rectores; el régimen taxativo y estricto de excepciones; la creación de una instancia de revisión independiente, como la Agencia de Acceso a la Información Pública, y el régimen de transparencia activa de la Ley n.º. 27275 de Acceso a la Información Pública.

Respecto a las áreas con potencial de mejora en el acceso a la **participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales**, se identificaron las siguientes:

4. Popularmente como “Ley de Etiquetado Frontal”, promueve el derecho a la salud y a contar con información clara y veraz sobre el contenido de nutrientes críticos en los alimentos envasados y bebidas sin alcohol.

- ▶ la adecuación de la participación pública a las características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género del público;
- ▶ las prácticas destinadas a asegurar la participación de las personas y comunidades que podrían ser directamente impactadas por la toma de decisión, identificando y apoyando especialmente a personas o grupos en situación de vulnerabilidad;
- ▶ la posibilidad de participar desde etapas iniciales de la toma de decisión;
- ▶ la comunicación de los resultados del proceso a través de medios adecuados (publicación en web, comunicación expresa y directa a las personas que participaron en el proceso, etc.);
- ▶ la importancia de contar con una norma de presupuestos mínimos que regule la evaluación ambiental, incluyendo Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación Ambiental Estratégica y, en términos generales,
- ▶ la regulación de otros instrumentos o procedimientos para establecer espacios apropiados de participación en asuntos ambientales, más allá de la audiencia pública, que sean eficaces para valorar el conocimiento local y la interacción de diferentes visiones y saberes.

Relativo al **acceso a la justicia en asuntos ambientales**, las áreas con posibilidad de mejora se vinculan con:

- ▶ la formulación de normas especiales que contemplen medios para facilitar el acceso a la justicia en materia ambiental o para atender a los grupos en situación de vulnerabilidad;
- ▶ que el acceso a la justicia se encuentra limitado en la práctica por las dificultades para acceder al patrocinio profesional para iniciar las causas, y
- ▶ la importancia de promover mecanismos alternativos de solución de controversias en asuntos ambientales (tales como la mediación, la conciliación y otros que permitan prevenir o solucionar dichas controversias).

Por último, las áreas de mejora que se vinculan a la situación y protección de **defensoras y defensores ambientales** son:

- ▶ la importancia de contar con medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover el ejercicio de los derechos de acceso, y
- ▶ la existencia de normas específicas que integren un enfoque preventivo (prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones) ante situaciones en las que las defensoras y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales se encuentren involucradas e involucrados.

Estrategia de participación pública para la construcción del plan y resultados obtenidos

El objetivo primario de esta estrategia de participación fue articular un diálogo sustantivo a nivel federal con diversos actores y sectores, teniendo como base el mapeo elaborado con

anterioridad. La estrategia permitió recoger propuestas para la implementación del Acuerdo de Escazú en la Argentina, que fueron un insumo central para la elaboración de este plan, en conjunto con las áreas de mejora y recomendaciones surgidas en el diagnóstico y otras acciones definidas por áreas del Estado nacional. El alcance de la estrategia fue de nivel federal, por lo tanto, las propuestas recibidas fueron consideradas como lineamientos o requerimientos de acción para los organismos del Poder Ejecutivo de la Administración Pública Nacional, respetando tanto la independencia de poderes como las competencias de las jurisdicciones en la materia.

La estrategia se desarrolló en tres modalidades de intervención: **encuentros colaborativos virtuales, mesas de diálogo regionales y un buzón de recepción de propuestas.** En forma adicional, se dispuso de una dirección de correo electrónico (acuerdoescazu@ambiente.gob.ar) para recibir consultas, propuestas e inquietudes durante todo el proceso. Así, la estrategia combinó intervenciones virtuales sincrónicas, un espacio asincrónico para recibir aportes escritos y diálogos de carácter presencial:

- ▶ **Cuatro encuentros colaborativos virtuales:** en modalidad sincrónica a distancia, se desarrolló un encuentro de presentación de la estrategia y sus modalidades de participación, y luego, tres encuentros temáticos.
- ▶ **Cinco mesas de diálogo regionales:** de manera complementaria a los encuentros colaborativos virtuales, se llevaron a cabo instancias presenciales de consulta y trabajo colaborativo con organizaciones socioambientales territoriales.
- ▶ **Un buzón de propuestas:** durante todo el desarrollo de la estrategia, se puso a disposición un formulario de recepción de propuestas.

Figura 5.
Estrategia de participación pública





Los encuentros, tanto virtuales como presenciales, se llevaron a cabo con una modalidad tipo taller y estuvieron organizados en dos momentos: una primera parte expositiva, en la que se abordaron los contenidos principales del acuerdo, se presentaron las acciones de implementación nacional en marcha y se repasaron las áreas de mejora identificadas en el diagnóstico, y una segunda parte, en la que las y los participantes se dividieron en grupos y mantuvieron diálogos enfocados sobre los ejes propuestos, a fin de recabar aportes para la construcción del plan. Puntualmente en el caso de los encuentros colaborativos virtuales, durante el momento expositivo también hubo intervenciones de una serie de organizaciones de la sociedad civil, quienes disertaron respecto de los aspectos prioritarios de cada eje desde su mirada y experiencia en el territorio.

Desarrollo de la estrategia y resultados obtenidos

Para la implementación de la estrategia se contó con un mapeo de actores del sector público, social, académico y privado, a partir del cual se convocó abiertamente a la participación, teniendo en cuenta las disposiciones del Acuerdo de Escazú para estos fines, incluyendo plazos razonables, difusión de los mecanismos previstos para la participación y comunicación activa de los alcances de la participación en la decisión. En forma previa a cada instancia, se proporcionó al público la información necesaria para hacer efectivo su derecho a participar, la cual estuvo centralizada en el [sitio web del Acuerdo de Escazú](#). Esto incluyó síntesis en lenguaje no técnico sobre cada pilar del acuerdo, resumen del diagnóstico, resumen de las recomendaciones derivadas de la línea de base, entre otros. Asimismo, se pusieron a disposición del público las presentaciones utilizadas en los encuentros junto con minutas sobre los puntos principales que se trataron en cada caso.

A continuación se describen las acciones realizadas en el marco de la estrategia de participación pública, junto con datos referidos a cantidad de inscripciones, número de participantes y aportes recibidos.

Tabla 1. Resultados generales de la estrategia de participación pública

Mecanismo de participación	Cantidad de participantes	Cantidad de propuestas
Encuentros colaborativos	136	255
Mesas regionales	158	178
Buzón de propuestas	33	100
Total	327	533

Tabla 2. Resultados de los encuentros virtuales colaborativos

Encuentros virtuales	Cantidad de personas inscriptas	Cantidad de asistentes	Cantidad de propuestas
Presentación de la estrategia y modalidades de participación (06/07/2023)	230	77	n/a
Acceso a la información y participación pública (13/07/2023)	280	65	126
Acceso a la Justicia y defensoras y defensores ambientales (20/07/2023)	290	42	63
Sistema de gobernanza (27/07/2023)	300	35	66
Totales	300⁵	136⁶	255
Promedios	285	54	-

5. El total de inscripciones corresponde a las inscripciones individuales recibidas que competen a uno o más encuentros. En la mayoría de los casos, las personas se inscribieron para más de un encuentro, por lo tanto, el total de inscripciones no coincide con la sumatoria de personas que participaron de los encuentros.

6. Al igual que en la cantidad de inscriptas e inscriptos, la cantidad total de asistentes corresponde a la cantidad real de asistentes, no a la suma de las y los participantes de los 4 encuentros; de este modo no se duplican asistencias al participar una persona de más de un encuentro.

Tabla 3. Resultados de las mesas de diálogo regionales

Mesas de diálogo	Cantidad de personas inscriptas	Cantidad de asistentes	Cantidad de propuestas
Mesa 1: La Pampa (16/08/2023)	44	28	35
Mesa 2: Tucumán (21/08/2023)	53	30	35
Mesa 3: Buenos Aires (23/08/2023)	118	36	40
Mesa 4: Misiones (28/08/2023)	92	40	39
Mesa 5: Patagonia (31/08/2023)	85	26	29
Totales	392	160	178

Tabla 4. Resultados del buzón de propuestas (33 respuestas, agosto 2023)

Eje	Cantidad de respuestas recibidas	Cantidad de propuestas	Porcentaje de propuestas sobre respuestas recibidas
Acceso a información	30	17	56,67 %
Participación pública	29	22	75,86 %
Acceso a justicia	26	20	76,92 %
Defensoras y defensores	22	14	63,64 %
Gobernanza	25	13	52,00 %
Fortalecimiento de capacidades	20	14	70,00 %
Total de respuestas y propuestas	152	100	65,79 %

Figura 6.

Representación sectorial de las y los participantes de la estrategia

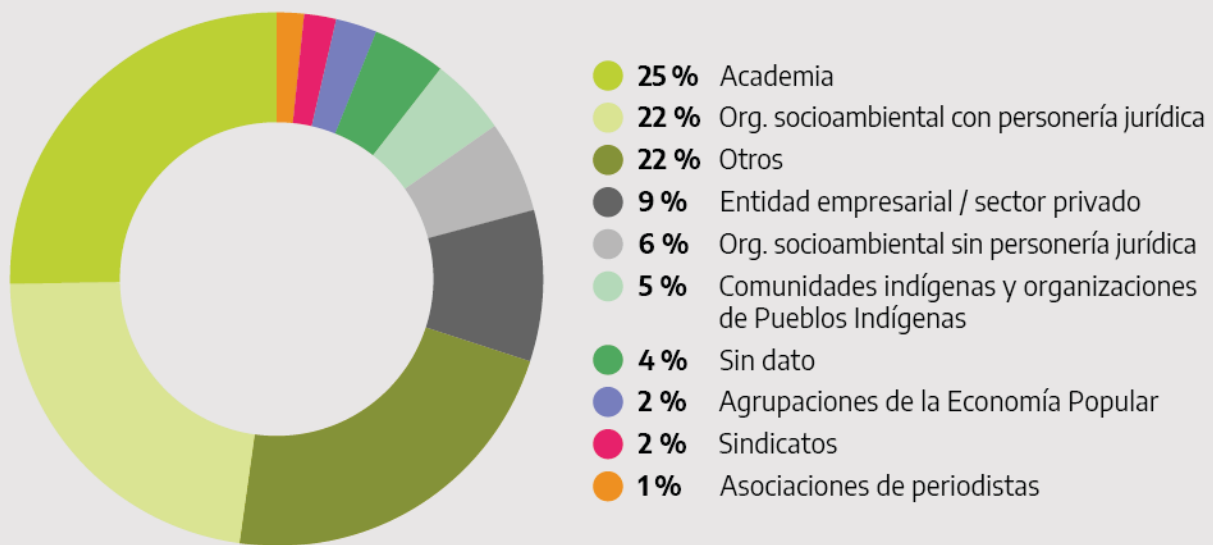


Figura 7.

Representación por jurisdicción de las y los participantes de la estrategia

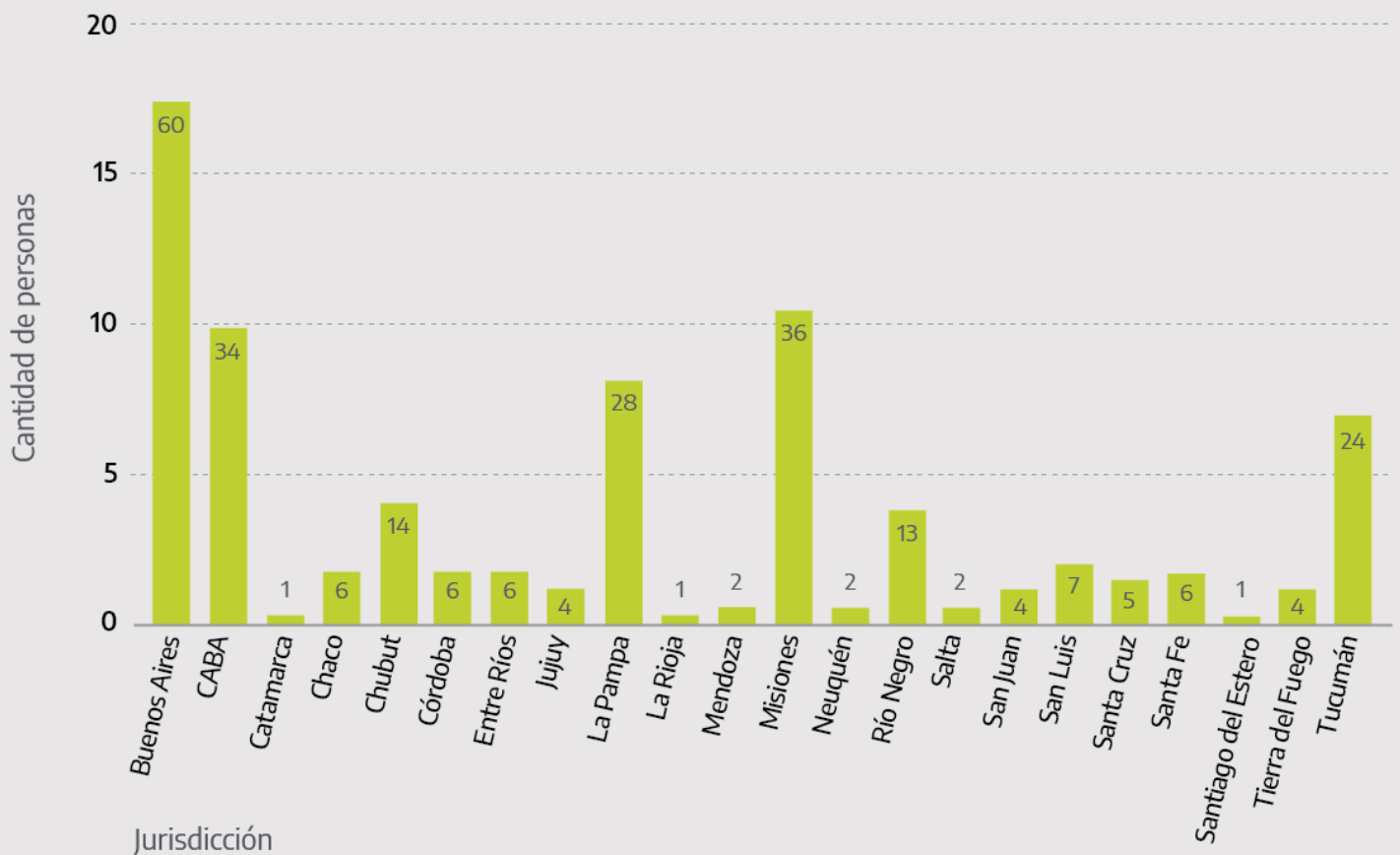
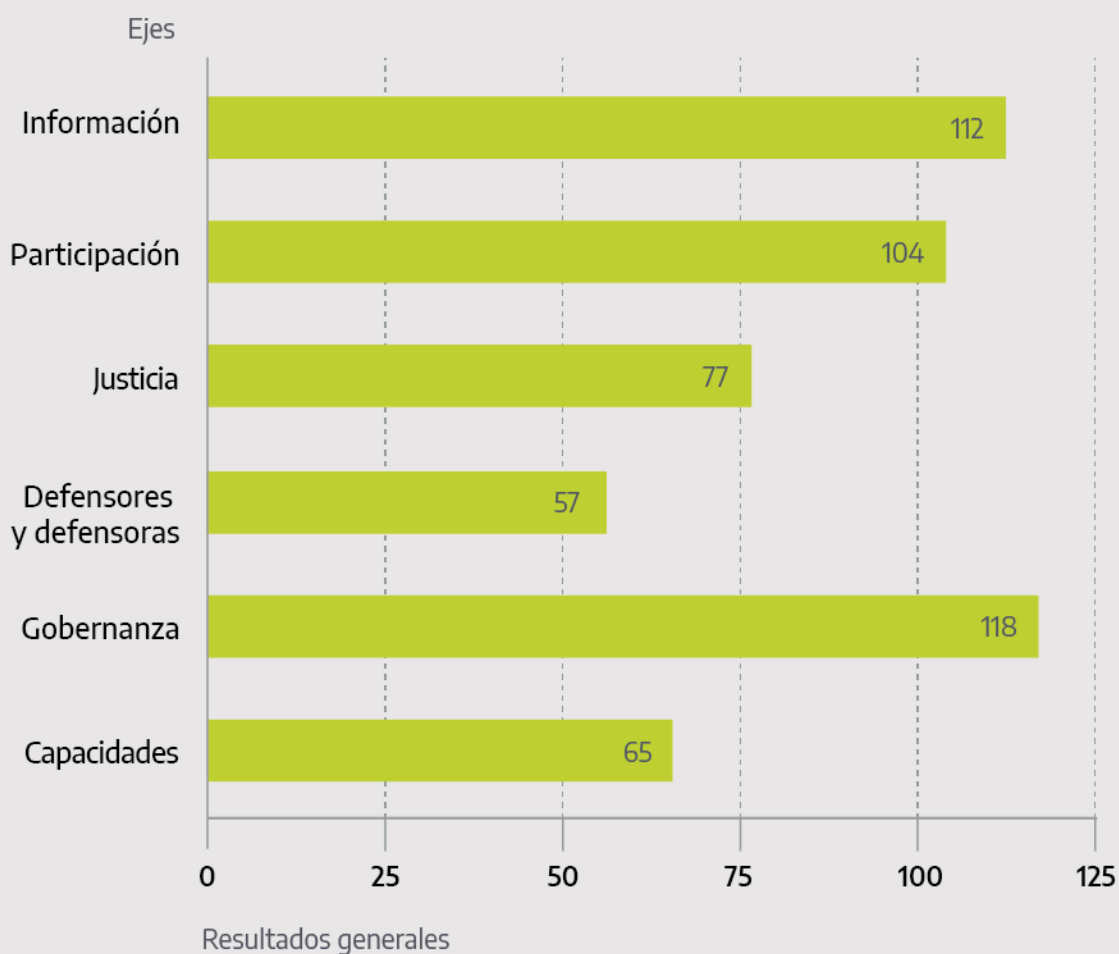


Figura 8.
Cantidad de propuestas recibidas
por eje temático



En total se recibieron **533 aportes** para los seis ejes que constituyen este plan. A continuación, se acercan datos sobre la participación por sectores y la distribución de propuestas por ejes.

En cuanto a la composición sectorial y representación federal, participaron personas y organizaciones de 22 jurisdicciones (Figuras 6 y 7). En su mayoría pertenecen al sector académico (26,6 %), organizaciones socioambientales con personería jurídica (23,6 %), sector privado (8,2 %), organizaciones socioambientales sin personería jurídica (6 %), sector gubernamental (6 %) y Comunidades Indígenas y organizaciones de Pueblos Indígenas (4,9 %). Participaron también otras organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones de la economía popular, agrupaciones religiosas, entidades del poder judicial a nivel jurisdiccional, profesionales independientes, docentes, estudiantes, personal de la salud, medios y periodistas, sindicatos y consultores ambientales. En relación a la participación por género, del total de asistentes se identificaron un 65 % de mujeres, y un 34,5 % de varones.

En relación a los contenidos de los aportes, el mayor interés estuvo centrado en las necesidades de gobernanza y de seguimiento del cumplimiento del Acuerdo de Escazú (22 %). La mayor cantidad de propuestas para los cuatro pilares del acuerdo se centró en necesidades de acceso a la información pública ambiental (21 %), seguido de participación pública en la toma de decisiones (19 %), acceso a la justicia en asuntos ambientales (14 %) y defensoras y defensores ambientales (11 %). De manera transversal, se identificó que el fortalecimiento de capacidades tanto públicas como hacia la ciudadanía se percibe como una necesidad en todos los ejes temáticos.

Integración de los resultados de la estrategia de participación pública al plan

Para la sistematización de los resultados, se definieron **ejes** en los que se vincularon las recomendaciones de la ciudadanía con los pilares del Acuerdo de Escazú: (A) acceso a la información pública ambiental, (B) participación pública en la toma de decisiones ambientales (C) acceso a la justicia en asuntos ambientales y (D) defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales; además, se incorporaron dos ejes transversales: (E) fortalecimiento de capacidades y (F) sistema de gobernanza.

A partir de las propuestas y sugerencias recibidas a través los diversos mecanismos participativos, para cada eje se definieron una serie de **lineamientos** amplios que responden a aquellos temas y aportes orientados en un mismo sentido. Para cada lineamiento se establecieron objetivos e indicadores propuestos para el seguimiento posterior, a fin de facilitar un monitoreo activo por parte de la red de personas, grupos e instituciones que han dado impulso a este plan, participando de su construcción. Se destaca que la necesidad de métricas de seguimiento surge de inquietudes planteadas por la ciudadanía, donde se ha planteado también que estos indicadores sean públicos para permitir visualizar los avances en la materia.

A su vez, cada lineamiento está integrado por **acciones**, de las cuales se consideran prioritarias aquellas que aparecieron con mayor frecuencia en los encuentros virtuales, las mesas regionales y el buzón de propuestas. Para llegar a esta definición, se llevó adelante un proceso de **validación dentro del Estado nacional**, mediante instancias formales e informales de validación y análisis de viabilidad, que partieron desde la primera consulta pública realizada en 2022, hasta llegar al ámbito de la puesta en marcha del Gabinete Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú. En su calidad de autoridades competentes en los términos del Acuerdo, participaron en acotar o ampliar el alcance de los compromisos asumidos. A este fin, se establecieron tres criterios de viabilidad para el análisis de las acciones a incluir en el plan:

- ▶ **Viabilidad política-administrativa:** la iniciativa no debe contravenir la normativa existente y debe ser posible de implementar por algún área del Poder Ejecutivo Nacional en un plazo de tres años.
- ▶ **Viabilidad técnica:** la implementación de la iniciativa propuesta debe ser posible en términos de requerimientos de infraestructura, equipamiento, conocimiento, equipos técnicos, etc.
- ▶ **Viabilidad presupuestaria:** se refiere a la capacidad de gestión del financiamiento que requiere la acción recomendada.

Por último, cabe destacar que aquellas propuestas y sugerencias de acciones que, por no cumplir alguno de estos criterios de viabilidad, no se hayan incluido en este plan, están registradas en el documento *Propuestas Ciudadanas para la Implementación del Acuerdo de Escazú: resultados de la estrategia de participación 2023*. Este documento dará cuenta de las recomendaciones y comentarios recogidos para cada eje durante todas las instancias y espacios de recepción de propuestas, de manera que puedan ser consideradas ya sea durante la ejecución de este plan o bien en la elaboración de los que lo sucedan.

Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú

Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú

A continuación, se presentan las acciones que, a partir de los resultados de la estrategia de participación pública, fueron identificadas como prioritarias, y que luego fueron consideradas viables (técnica, administrativa y financieramente) por las áreas con competencias en su ejecución, a fin de ser incorporadas al plan.

Se trata de acciones estratégicas organizadas en torno a seis ejes: (A) acceso a la información pública ambiental; (B) participación pública en la toma de decisiones ambientales; (C) acceso a la justicia en asuntos ambientales; (D) defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales; (E) fortalecimiento de capacidades; (F) sistema de gobernanza para la ejecución y el seguimiento de la implementación del acuerdo.

En función de las necesidades detectadas durante el proceso participativo, la mayor cantidad de acciones se centran en los ejes de acceso a la información y participación pública y, de manera transversal, en el fortalecimiento de capacidades (tabla 5).

Tabla 5. Lineamientos y acciones por eje

Eje	Lineamientos	Acciones
A. Acceso a la información pública ambiental	9	28
B. Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales	4	10
C. Acceso a la justicia en asuntos ambientales	2	5
D. Defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales	3	5
E. Creación y fortalecimiento de capacidades	5	22
F. Gobernanza para la implementación del Acuerdo de Escazú	1	3
Totales	24	73

Tal como ya se ha mencionado, consiste en un plan a ejecutar en **tres años**, a cargo del Poder Ejecutivo de la Administración Pública Nacional. Para facilitar el seguimiento de las acciones, tanto interno como por parte de la ciudadanía, se han establecido objetivos e indicadores por cada lineamiento, a fin de orientar la materialización concreta de las acciones. A su vez, no se incluyen plazos detallados de corto alcance ni metas específicas, ya que estas dependen de las capacidades internas de cada área responsable.

Como resultado del proceso participativo, se incluye el abordaje con comunidades de Pueblos Indígenas como lineamiento específico de trabajo. A su vez, se incorpora una línea de trabajo específica con las jurisdicciones provinciales y locales, desde el eje de fortalecimiento de capacidades, a fin de respetar las competencias de las jurisdicciones en materia de implementación local.

Tabla 6. Lineamientos y acciones para el eje A. Acceso a la información pública ambiental

A. Acceso a la información pública ambiental		
A.1. Robustecer los mecanismos y procedimientos de respuesta a solicitudes y entrega de información pública ambiental Objetivo: que el Estado nacional fortalezca los procedimientos internos de respuesta y difusión de información. Cantidad de acciones: cuatro		
Acciones	Indicadores	Área/s responsable/s
A.1.1. Alinear técnicamente a los diferentes sectores internos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS) para que generen información actualizada. A.1.2. Promover el intercambio de experiencias, alianzas y buenas prácticas entre organismos de la Administración Pública Nacional (APN). Integrar la información entre las áreas del MAyDS, con otros organismos de la APN mediante la coordinación vertical y horizontal entre organismos públicos. A.1.3. Promover el trabajo entre sujetos obligados a través de la red de responsables de acceso a la información pública designados en el marco de la Ley 27275, con el objetivo de establecer criterios comunes para la tramitación y la respuesta de solicitudes de información pública ambiental, contribuyendo al cumplimiento de los plazos de respuesta y entrega de información. A.1.4. Adecuar y converger la normativa ⁷ existente sobre Acceso a la Información Pública y Acceso a la Información Pública ambiental, con el objetivo de formalizar la instancia de reclamo administrativo por incumplimiento del acceso a la información pública ambiental y ofrecer los mejores estándares para el ejercicio del derecho por parte de la ciudadanía.	Cantidad de procesos internos actualizados a fin de mejorar comunicaciones interinstitucionales e interjurisdiccionales. Cantidad de solicitudes recibidas y gestionadas sobre información pública ambiental por parte de los sujetos obligados. Guía de buenas prácticas para la tramitación de solicitudes de acceso a la información pública ambiental elaborada y publicada. Normas aclaratorias aprobadas o criterios orientadores que permitan adecuar la Ley 25381 y la Ley 27275. Registro de sujetos obligados por la Ley 25831 actualizado.	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Agencia de Acceso a la Información Pública

7. En el sentido amplio de normativa, incluye Resoluciones (Conjuntas o por cada dependencia), Decisiones Administrativas, Decretos, entre otros actos administrativos.

A.2. Impulsar el ejercicio de la transparencia activa en asuntos ambientales

Objetivo: fortalecer la faz proactiva de la información ambiental, anticipándose a los requerimientos de las personas e instituciones interesadas.

Cantidad de acciones: cinco

Acciones	Indicadores	Área/s responsable/s
<p>A.2.1. Incorporar el principio de máxima publicidad en la práctica, en el marco de las normas existentes. Otorgar mayor visibilidad a la información sobre los derechos de acceso en asuntos ambientales.</p> <p>A.2.2. Identificar áreas gubernamentales nacionales (ministerios, secretarías, etc.) que tengan en su poder información ambiental que pueda ser requerida por personas e instituciones interesadas.</p> <p>A.2.3. Identificar los organismos públicos que tienen en su poder información ambiental contenida en concesiones, contratos, convenios o autorizaciones y reforzar los términos de esta difusión para anticiparse a pedidos que los órganos públicos puedan recibir, mediante espacios de acceso virtual y público.</p> <p>A.2.4. Incorporar la información pública ambiental y los datos socioambientales de actividades y proyectos como contenido transversal en las pestañas de transparencia activa de las áreas y organismos identificados en A.2.2. y A.2.3.</p> <p>A.2.5. Publicar información actualizada sobre los avances del Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú en la web del acuerdo y en un micrositio específico sobre información pública ambiental dentro del Portal Nacional de Transparencia.</p>	<p>Cantidad de actos administrativos que incorporen el principio de máxima publicidad.</p> <p>Cantidad y frecuencia de estadísticas sobre acceso a la información ambiental publicadas.</p> <p>Áreas y organismos en poder de información pública identificados.</p> <p>Pestañas de transparencia activa que contenga información pública ambiental y datos socioambientales de actividades y proyectos.</p>	<p>Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</p> <p>Agencia de Acceso a la Información Pública</p>

A.3. Facilitar el acceso a la información pública ambiental a personas y grupos en situación de vulnerabilidad

Objetivo: atender las necesidades particulares de personas y grupos en situación de vulnerabilidad para acceder a la información pública ambiental.

Cantidad de acciones: tres

Acciones	Indicadores	Área/s responsable/s
<p>A.3.1. Articular con diferentes espacios gubernamentales (tales como Centros de Acceso a la Justicia, Defensoría del Pueblo de la Nación, Defensorías del Pueblo locales) y otras instituciones pertinentes para apoyar a personas y grupos en situación de vulnerabilidad interesadas en acceder a información pública ambiental. Realizar nexos y mecanismos de apoyo a nivel territorial para trabajar con poblaciones vulnerables, y llevar información a través de los medios adecuados.</p> <p>A.3.2. Disponibilizar medios adecuados para llegar a los pobladores de localidades rurales y dispersas. Incorporar difusión territorial y medios no digitales como la radio, que tiene mayor alcance territorial y federal para dar mayor difusión, publicidad y comunicación del Acuerdo de Escazú.</p> <p>A.3.3. Realizar un esfuerzo adicional para incorporar información socioambiental culturalmente adecuada y, si correspondiera, en lenguas originarias, en el marco de los procesos de Consulta Previa, Libre e Informada.</p>	<p>Cantidad de convenios u otros actos administrativos de cooperación mutua/articulación entre entidades gubernamentales e instituciones que asistan a personas y grupos en situación de vulnerabilidad.</p> <p>Cantidad de personas asistidas desde las Defensorías del Pueblo o los CAJ en materia de acceso a la información pública ambiental.</p> <p>Cantidad de acciones de difusión de información ambiental a nivel territorial.</p> <p>Cantidad de documentos con información socioambiental en lenguas originarias.</p>	<p>Ministerio de Justicia y Derechos Humanos</p> <p>Instituto Nacional de Asuntos Indígenas</p> <p>Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</p> <p>Agencia de Acceso a la Información Pública</p>

A.4. Promover la generación y entrega de información pública ambiental en formatos diversos, accesibles y comprensibles

Objetivo: promover que todas las autoridades involucradas en la gestión de la información se esfuercen para que la información ambiental sea accesible, en los formatos requeridos o similares, siempre que sea posible.

Cantidad de acciones: dos

Acciones	Indicadores	Área/s responsable/s
<p>A.4.1. Impulsar la actualización periódica de la información bajo criterios unificados de formatos y organización (por temas, por años, por geolocalización, etc.).</p> <p>A.4.2. Considerar la accesibilidad para personas con diversas discapacidades (falta de visión o audición) a fin de que puedan acceder a la información en el formato adecuado y disponibilizar medios de información para personas no letradas.</p>	<p>Lineamientos sobre organización y formato de información definidos.</p> <p>Cantidad de publicaciones que contengan información ambiental con criterios de accesibilidad.</p>	<p>Agencia de Acceso a la Información Pública</p> <p>Gabinete Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú</p>

A.5. Promover la generación y entrega de información comprensible y en formatos accesibles en el marco de procedimientos de evaluación ambiental

Objetivo: posibilitar a la ciudadanía un acceso amplio a información ambiental de actividades y proyectos.

Cantidad de acciones: cinco

Acciones	Indicadores	Área/s responsable/s
<p>A.5.1. En los procesos de evaluación ambiental sustanciados por organismos nacionales, requerir la elaboración de piezas específicas (como documentos de divulgación) que expliciten las implicancias de los estudios de impacto ambiental, en lenguaje accesible y para públicos no expertos.</p> <p>A.5.2. Estandarizar el contenido de los documentos de divulgación según lo dispuesto por el Artículo 7.17 del acuerdo.</p> <p>A.5.3. Realizar acciones de difusión territorial de las actividades y proyectos a cargo de organismos nacionales con incumbencia en decisiones ambientales.</p> <p>A.5.4. Diseñar mecanismos para centralizar la información sobre actividades y proyectos en un único enlace, que permita acceder a los expedientes correspondientes y a información geolocalizada, incluyendo localidades o municipios potencialmente afectados.</p> <p>A.5.5. Solicitar a los proponentes privados de proyectos la difusión amplia de los mecanismos, ya sean digitales o físicos, para acceder a información socioambiental de sus actividades (documento de divulgación, presentaciones a la comunidad, mecanismos de atención a quejas, etc.).</p>	<p>Lineamientos estandarizados para documentos de divulgación producidos.</p> <p>Cantidad de espacios y mecanismos de acceso a la información a cargo de los proponentes de proyectos.</p> <p>Cantidad de mecanismos de acceso a información socioambiental de proyectos de obra o actividad a cargo de proponentes privados.</p> <p>Mecanismos para centralizar información diseñados.</p>	<p>Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</p> <p>Gabinete Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú</p>

A.6. Implementar un registro de emisiones y transferencias de contaminantes (RETC)
Objetivo: propiciar la proactividad en organismos del Estado nacional en la recopilación y difusión sobre emisiones y transferencias de contaminantes.
Cantidad de acciones: tres

Acciones	Indicadores	Área/s responsable/s
<p>A.6.1. Implementar un proyecto piloto de RETC en aire, agua y suelo, cuya información se encuentre disponible en línea, con insumos de los organismos públicos que ya generan datos e información⁸.</p> <p>A.6.2. Impulsar la generación del marco normativo necesario para la implementación de un RETC en Argentina.</p> <p>A.6.3. Difundir datos abiertos relativos al cumplimiento de compromisos internacionales (Protocolo de Montreal, Convenios de Basilea, Estocolmo, Rotterdam, Minamata).</p>	<p>Proyecto piloto de RETC implementado.</p> <p>Datos relativos al proyecto piloto publicados.</p> <p>Proyecto normativo de implementación del RETC redactado.</p> <p>Capacitaciones a sectores público, privado, científico-académico y sociedad civil realizadas.</p> <p>Comité junto a contrapartes técnicas pertenecientes a las distintas provincias del país conformado.</p> <p>Datos relativos al cumplimiento de compromisos ambientales internacionales publicados.</p>	<p>Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</p>

A.7. Potenciar el Centro de Información Ambiental (CIAM) para alertas tempranas ante amenazas a la salud o al ambiente

Objetivo: potenciar funciones y capacidades del Centro de Información Ambiental para lograr alertas tempranas de amenazas inminentes a la salud pública o al ambiente.
Cantidad de acciones: dos

Acciones	Indicadores	Área/s responsable/s
<p>A.7.1. Generar sinergias entre este centro y los organismos científico-técnicos. Articular con el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), del Ministerio de Seguridad, para la reducción de riesgos, manejo y recuperación de la crisis, ante incendios, emergencias hídricas, entre otras. Incluir en el CIAM información de transporte de sustancias peligrosas, en articulación con el Ministerio de Transporte.</p> <p>A.7.2. Establecer mecanismos para generar y publicar información socioambiental que pueda utilizarse en la elaboración de EsIA.</p>	<p>Actualización periódica del CIAM.</p> <p>Información disponible sobre riesgos y amenazas.</p>	<p>Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</p>

8. El registro solo se aplicará a agua, aire y suelo, ya que no se cuenta con metodologías internacionales para ampliar a subsuelo. El registro se nutrirá principalmente con datos estimados anualmente (Tn/año) por los establecimientos (sector productivo) y por distintos organismos (sector público).

A.8. Promover la realización de evaluaciones independientes de desempeño ambiental de políticas nacionales.

Objetivo: evaluar las políticas nacionales ambientales y el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales, a través de mecanismos de revisión independientes.

Cantidad de acciones: una

Acciones	Indicadores	Área/s responsables
A.8.1. Coordinar acciones con órganos internacionales con competencias en la materia para evaluar las políticas nacionales ambientales y el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales.	Evaluaciones independientes de desempeño realizadas.	Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

A.9. Promover el acceso a la información ambiental de entidades privadas

Objetivo: propiciar el acceso a información de interés público ambiental que esté en manos de entidades privadas.

Cantidad de acciones: tres

Acciones	Indicadores	Área/s responsable/s
A.9.1. Promover en el sector privado el reporte y la divulgación de información ambiental, social y de gobernanza (ASG), en articulación con la Comisión Nacional de Valores ⁹ .	Acciones de difusión realizadas.	Gabinete Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú
A.9.2. Apoyar a las pequeñas y medianas empresas en la elaboración de informes de sostenibilidad. Realizar capacitaciones y generar incentivos para que las pequeñas y medianas empresas elaboren informes de sostenibilidad, mediante programas específicos o alianzas con cámaras empresarias de sectores de la economía identificados como prioritarios.	Cantidad de capacitaciones al sector privado (pequeñas y medianas empresas) sobre informes de sostenibilidad.	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
A.9.3. Propiciar la tramitación y resolución de las solicitudes de acceso a la información pública ambiental en empresas públicas y licenciatarias o concesionarias de servicios públicos.	Cantidad de solicitudes y reclamos en materia de acceso a la información pública ambiental.	Agencia de Acceso a la Información Pública

9. Esta acción se propone en el marco de la reciente publicación de la Guía para el reporte y divulgación voluntaria de información ambiental, social, y de gobernanza (ASG), de la Comisión Nacional de Valores:

www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_informacion_asg-_2023.pdf.

Tabla 7. Lineamientos y acciones para el eje B. Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales

B. Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales		
B.1. Promover una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, sobre la base de los marcos normativos internos Objetivo: aumentar los niveles de participación de la ciudadanía y ampliar el alcance de las convocatorias. Cantidad de acciones: dos		
Acciones	Indicadores	Área/s responsable/s
B.1.1. Incrementar de manera progresiva, y mediante los dispositivos y mecanismos disponibles, las acciones de participación que se realizan en territorio. B.1.2. En la selección de lugares y horarios para participar, ofrecer alternativas que consideren aspectos de género, edad, accesibilidad, horario laboral, necesidad de espacios de cuidado, entre otros.	Cantidad de instancias participativas de organismos del Estado nacional vinculadas a decisiones ambientales realizadas en territorio. Lugares y horarios seleccionados con base en criterios de accesibilidad.	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Gabinete Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú
B.2. Generar mecanismos adecuados para la participación efectiva de las Comunidades Indígenas en las decisiones ambientales Objetivo: propiciar la participación de las Comunidades Indígenas para la implementación del Acuerdo de Escazú. Cantidad de acciones: dos		
Acciones	Indicadores	Área/s responsable/s
B.2.1. Generar acciones de difusión y consulta culturalmente apropiadas y dirigidas a Comunidades Indígenas, a fin de que puedan incidir en cómo se implementan las disposiciones del Acuerdo de Escazú según sus necesidades y circunstancias. En el marco de este proceso de diálogo, consultar por los modos de implementación de los cuatro pilares, así como por el sistema de gobernanza. B.2.2. En un marco de sinergias entre el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 OIT, promover la participación de las Comunidades Indígenas en las tomas de decisiones ambientales que pudieran potencialmente afectarlas. Identificar a estas comunidades, cuando corresponda, como actores clave y facilitar su acceso a la información de relevancia para que su participación resulte efectiva.	Proceso de consulta relativo a la implementación del Acuerdo de Escazú concretado con las Comunidades Indígenas.	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Instituto Nacional de Asuntos Indígenas

B.3. Establecer estándares mínimos para la participación pública en asuntos ambientales

Objetivo: propiciar el establecimiento de espacios apropiados de participación en asuntos ambientales desde las instancias iniciales de la toma de decisiones.

Cantidad de acciones: cuatro

Acciones	Indicadores	Área/s responsable/s
<p>B.3.1. Diversificar y ampliar los mecanismos de participación del público en la toma de decisiones ambientales, teniendo en cuenta especificidades territoriales y culturales.</p> <p>B.3.2. Adoptar medidas para asegurar la participación desde etapas iniciales de los procesos de toma de decisiones y en el seguimiento, control y monitoreo de los proyectos, programas y políticas, fomentando la rendición de cuentas.</p> <p>B.3.3. Generar guías que establezcan lineamientos mínimos para la puesta en marcha de procesos participativos y definir criterios unificados para integrar los resultados de los mismos en la toma de decisiones. Diseñar instrumentos para informar al público sobre los motivos y fundamentos que sustentan cada decisión, así como el modo en que se tuvieron en cuenta sus observaciones.</p> <p>B.3.4. Impulsar la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) como instrumento para la incorporación de los aspectos socioambientales en políticas, planes y programas gubernamentales.</p>	<p>Cantidad de actos administrativos sobre decisiones que hayan contemplado procesos integrales de participación pública.</p> <p>Tipología de mecanismos de participación utilizados a fin de fortalecer ese proceso.</p> <p>Guías con lineamientos mínimos para la participación en decisiones ambientales.</p> <p>Evaluaciones ambientales estratégicas realizadas.</p>	<p>Gabinete de Implementación del Acuerdo de Escazú</p>

B.4. Impulsar una norma de presupuestos mínimos de evaluación ambiental

Objetivo: asegurar el derecho de acceso a la información y a la participación del público en los procesos de toma de decisiones ambientales.

Cantidad de acciones: dos

Acciones	Indicadores	Área/s responsable/s
<p>B.4.1. Impulsar la sanción de una norma de presupuestos mínimos de protección ambiental que regule la EIA y la EAE, respetando las competencias de las jurisdicciones, que permita contar con claras definiciones a ser aplicadas en todo el territorio nacional, en particular respecto al acceso a la información pública y a la participación en la toma de decisiones ambientales.</p> <p>B.4.2. Impulsar la creación de un servicio o agencia de evaluación ambiental como ente de derecho público con personería jurídica propia, patrimonio propio, autarquía administrativa y funcional, que actúe como autoridad competente en materia de evaluación ambiental en el ámbito nacional.</p>	<p>Proyectos normativos redactados.</p>	<p>Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</p>

Tabla 8. Lineamientos y acciones para el eje C. Acceso a la justicia en asuntos ambientales

C. Acceso a la justicia en asuntos ambientales		
C.1. Conformar un espacio de articulación interinstitucional sobre justicia ambiental en el marco de la Administración Pública Nacional Objetivo: establecer sinergias y líneas de trabajo conjuntas entre las áreas con competencias en materia de acceso a la justicia en asuntos ambientales de la APN. Cantidad de acciones: dos		
Acciones	Indicadores	Área/s responsable/s
C.1.1. Establecer un espacio de trabajo entre las áreas y organismos públicos con competencias directas en materia de acceso a la justicia en asuntos ambientales al interior del Poder Ejecutivo Nacional y junto a la Defensoría del Pueblo de la Nación. C.1.2. Coordinar acciones a nivel federal para la aplicación de medios alternativos de resolución de conflictos ambientales, como la mediación.	Existencia de líneas de trabajo conjuntas entre las áreas con competencias en materia de acceso a justicia en asuntos ambientales de la APN.	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
C.2. Ampliar el acceso a dispositivos del Estado nacional e instituciones de asistencia jurídica Objetivo: facilitar el acceso a la justicia en materia ambiental a mayor cantidad de personas y, en particular, a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Cantidad de acciones: tres		
Acciones	Indicadores	Área/s responsable/s
C.2.1. Ampliar el rol y funciones de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), para garantizar el patrocinio en derecho ambiental. Capitalizar su experiencia territorial y extender el abordaje de cuestiones ambientales. C.2.2. Propiciar alianzas con Colegios Públicos de Abogados y clínicas jurídicas universitarias gratuitas, para ampliar la asistencia en el inicio de instancias judiciales o de mediación y facilitar el acceso a la justicia en materia ambiental, para personas o grupos en situación de vulnerabilidad. C.2.3. Identificar otros dispositivos o mecanismos con amplia distribución territorial que puedan brindar acompañamiento y atención legal primaria en asuntos ambientales.	Porcentaje de casos recibidos en los CAJ sobre acceso a la justicia en asuntos ambientales en relación a los casos totales. Alianzas con instituciones de asistencia jurídica concretadas. Actualización del mapa de dispositivos territoriales.	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Tabla 9. Lineamientos y acciones para el eje D. Defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales

D. Defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales		
D.1. Analizar la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales Objetivo: conocer la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Cantidad de acciones: dos		
Acciones	Indicadores	Área/s responsable/s
D.1.1. Realizar un diagnóstico y análisis sobre la situación de las personas y grupos que defienden derechos humanos en asuntos ambientales, identificando los obstáculos y vulneraciones de derechos a los que se enfrentan. D.1.2. A partir del diagnóstico, identificar y recomendar acciones de prevención y promover la intervención de los organismos competentes tanto en la protección de las defensoras y los defensores como en la investigación y sanción de los responsables.	Diagnóstico realizado. Taxonomía de obstáculos y vulneraciones de derechos. Acciones de prevención derivadas del diagnóstico.	Centro Internacional de Promoción de los Derechos Humanos
D.2. Incorporar mecanismos para garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones puedan actuar sin amenazas o restricciones Objetivo: proteger y acompañar a defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Cantidad de acciones: dos		
Acciones	Indicadores	Área/s responsable/s
D.2.1. Establecer mecanismos específicos de protección y potenciar los canales que ya existen, tales como los Centros de Acceso de la Justicia. D.2.2. Generar alianzas entre entidades gubernamentales y no gubernamentales para la contención y acompañamiento de defensoras y defensores ambientales.	Existencia de mecanismos de protección de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Alianzas generadas.	Gabinete Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú

D.3. Participar en espacios regionales de trabajo sobre defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales Objetivo: acompañar y ser parte de los avances regionales en la materia. Cantidad de acciones: una		
Acciones	Indicadores	Área/s responsable/s
D.3.1. Participar activamente en la ejecución del Plan de Acción sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, a presentar en la COP3 del Acuerdo de Escazú.	Acciones de implementación del Plan de Acción en la Argentina.	Gabinete Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú

Tabla 10. Lineamientos y acciones para el eje E. Creación y fortalecimiento de capacidades

E. Creación y fortalecimiento de capacidades		
E.1. Fortalecer las capacidades de los equipos del Gobierno nacional y de Gobiernos provinciales y locales Objetivo: dotar a autoridades y equipos técnicos nacionales, provinciales y locales, de las capacidades necesarias para una efectiva implementación del Acuerdo de Escazú. Cantidad de acciones: ocho		
Acciones	Indicadores	Área/s responsable/s

<p>E.1.1. Ofrecer capacitaciones respecto del contenido del Acuerdo de Escazú a las diferentes áreas del Gobierno nacional y a los Gobiernos provinciales y locales.</p> <p>E.1.2. Incorporar contenidos específicos sobre derechos de acceso a las capacitaciones que se realizan en el marco de la aplicación de la Ley n.º 27592, Ley Yolanda, la cual tiene como objeto garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible para las personas que se desempeñen en la función pública. Fortalecer las acciones de seguimiento e implementación de la Ley Yolanda para que llegue información sobre derechos de acceso al personal de la Administración Pública Nacional.</p> <p>E.1.3. Elaborar una guía con orientaciones para sujetos obligados en materia de derechos de acceso del nivel jurisdiccional, que contenga recomendaciones prácticas para implementar las disposiciones del Acuerdo de Escazú en las distintas jurisdicciones del país.</p> <p>E.1.4. Identificar organismos provinciales que posean información pública ambiental y manifiesten necesidades de capacitación en instrumentos de medición y sistemas de gestión documental en materia ambiental. Generar orientaciones para una adecuada respuesta a solicitudes de información pública ambiental.</p> <p>E.1.5. Capacitar a los órganos de la APN con competencia ambiental o que intervienen en decisiones ambientales en las disposiciones del artículo 7 a fin de contar con recursos humanos preparados para llevar adelante instancias participativas.</p> <p>E.1.6. Propiciar la generación de estrategias de apertura de datos a nivel de las jurisdicciones, a través de la confección de estándares, guías, lineamientos y recomendaciones sobre la recolección y publicación de los mismos, en línea con las disposiciones de los Art. 5 y 6 del Acuerdo de Escazú.</p> <p>E.1.7. Difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información pública ambiental en las empresas públicas, con participación mayoritaria o minoritaria estatal y licenciatarias o concesionarias de servicios públicos en línea con la acción A.9.3.</p> <p>E.1.8. Crear un módulo con buenas prácticas y procedimientos sobre información pública ambiental en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional en Transparencia y Acceso a la Información Pública destinado a empresas públicas.</p>	<p>Cantidad de capacitaciones realizadas a equipos de Gobierno.</p> <p>Cantidad de funcionarias, funcionarios y miembros de equipos técnicos de diferentes niveles capacitados.</p> <p>Guía con orientaciones para sujetos obligados elaborada.</p> <p>Contenidos sobre el Acuerdo de Escazú incorporados a la capacitación de la Ley Yolanda.</p> <p>Orientaciones sobre apertura de datos generadas.</p> <p>Estrategias jurisdiccionales de apertura de datos desarrolladas.</p>	<p>Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</p> <p>Ministerio del Interior</p> <p>Secretaría de Innovación Pública</p> <p>Agencia de Acceso a la Información Pública</p>
--	--	--

E.2. Promover la actualización de conocimientos de los equipos de la APN vinculados al derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales

Objetivo: fortalecer capacidades para dar respuesta a las instancias de acceso a la justicia en asuntos ambientales que ante ellos se presenten.

Cantidad de acciones: cuatro

Acciones	Indicadores	Área/s responsable/s
E.2.1. A fin de colaborar con el cumplimiento de la acción C.2.1, capacitar al personal que conforma espacios de la APN vinculados al derecho de acceso a la justicia en territorio, en particular de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ).	Cantidad de personal de Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) capacitados.	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
E.2.2. Formar mediadores especializados en derecho ambiental, en el marco de los dispositivos existentes de mediación prejudicial y de orientación para el patrocinio gratuito.	Cantidad de mediadoras y mediadores formados en temas ambientales.	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
E.2.3. Elaborar contenidos sobre derechos humanos en asuntos ambientales, en el marco del Acuerdo, destinados a equipos vinculados al acceso a la justicia en asuntos ambientales.	Contenidos sobre derechos humanos en asuntos ambientales creados.	Agencia de Acceso a la Información Pública
E.2.4. Planificar y ejecutar actividades de sensibilización sobre la protección y el respeto del ejercicio del derecho de defensa del ambiente, a las fuerzas públicas de seguridad tanto nacionales como locales.	Acciones de sensibilización a las fuerzas de seguridad.	

E.3. Consolidar estándares mínimos de acceso a la información y participación pública a nivel nacional y jurisdiccional en EIA

Objetivo: elevar el estándar de los derechos de acceso en procedimientos de evaluación ambiental a nivel jurisdiccional.

Cantidad de acciones: tres

Acciones	Indicadores	Área/s responsable/s
<p>E.3.1. Capacitar a las áreas de Gobiernos provinciales con competencia en EIA o que intervienen en decisiones ambientales a fin de que soliciten a los proponentes la elaboración de documentos de divulgación, siguiendo los estándares previstos en la acción A.5.2.</p> <p>E.3.2. Capacitar en derechos de acceso a aquellas áreas de la APN vinculadas al sector productivo, de desarrollo energético, industrial y de obra pública, cuyos proyectos puedan producir impactos significativos en el ambiente.</p> <p>E.3.3. Generar capacitaciones y espacios de intercambio sobre las disposiciones del Acuerdo de Escazú para quienes intervienen en la realización de estudios de impacto ambiental, a fin de que sean consideradas en su elaboración.</p>	<p>Cantidad de áreas sectoriales de la APN con injerencia en EIA capacitadas.</p> <p>Cantidad de áreas de Gobierno a nivel jurisdiccional con competencia en EIA (ambiental o sectorial) capacitadas.</p> <p>Capacitaciones realizadas a quienes realizan EsIA.</p>	<p>Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</p> <p>Ministerio del Interior</p> <p>Agencia de Acceso a la Información Pública</p>

E.4. Realizar acciones de sensibilización y articulación interinstitucional para el empoderamiento de la ciudadanía en el marco de la Ley de Educación Ambiental Integral

Objetivo: formar capacidades en el sector social y la ciudadanía en general a fin de que puedan ejercer los derechos de acceso.

Cantidad de acciones: cuatro

Acciones	Indicadores	Área/s responsable/s
<p>E.4.1. Realizar campañas de difusión dirigidas a la ciudadanía a través de medios digitales y tradicionales, acerca de los derechos de acceso y las vías administrativas y judiciales que existen para su pleno ejercicio.</p> <p>E.4.2. Realizar campañas de sensibilización territoriales para que los actores sociales puedan conocer sus derechos de acceso, en alianza con las Defensorías del Pueblo y los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). Focalizar en acciones de sensibilización en poblaciones rurales y espacios habitados por Comunidades Indígenas.</p> <p>E.4.3. Diseñar estrategias y acciones de educación ambiental integral en el marco de la Ley n.º 27261, focalizadas en el ejercicio de los derechos de acceso en los distintos niveles de educación formal y no formal. Articular con las áreas competentes en la materia a nivel nacional y los espacios existentes con participación de las jurisdicciones, en el marco de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral.</p> <p>E.4.4. Difundir los mecanismos de reclamo administrativo en materia de información pública ambiental en la ciudadanía en general y en especial entre las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.</p>	<p>Cantidad de campañas de sensibilización sobre derechos de acceso realizadas.</p> <p>Acciones de educación ambiental integral sobre derechos de acceso realizadas.</p> <p>Actividades de difusión y sensibilización sobre la Ley de Información Pública Ambiental y los mecanismos de reclamo administrativo.</p> <p>Materiales gráficos y audiovisuales de sensibilización realizados para difundir el derecho de acceso a la información pública ambiental y los mecanismos de reclamo administrativo.</p>	<p>Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</p> <p>Ministerio de Justicia y Derechos Humanos</p> <p>Agencia de Acceso a la Información Pública</p>

E.5.Promover la cooperación regional sobre la implementación del Acuerdo de Escazú Objetivo: fortalecer las capacidades nacionales a fin de avanzar en una implementación efectiva del acuerdo. Cantidad de acciones: tres		
Acciones	Indicadores	Área/s responsable/s
<p>E.5.1. Participar en instancias de discusión e intercambio sobre derechos de acceso en asuntos ambientales y establecer alianzas estratégicas con actores de relevancia a nivel regional.</p> <p>E.5.2. Promover el intercambio de buenas prácticas con países de la región en relación a la implementación a nivel nacional del Acuerdo de Escazú, a través de la realización de seminarios y talleres.</p> <p>E.5.3. Potenciar la discusión sobre el acceso a la información pública ambiental en el marco de instancias regionales sobre acceso a la información pública y transparencia.</p>	<p>Instancias regionales con representación del Gobierno nacional.</p> <p>Alianzas concretadas.</p> <p>Acciones regionales promovidas desde la Red de Transparencia y Acceso a la Información, respecto de los derechos de acceso en materia ambiental.</p>	<p>Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto</p> <p>Agencia de Acceso a la Información Pública</p> <p>Gabinete Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú</p>

Tabla 11. Lineamientos y acciones para el eje F. Gobernanza para la implementación del Acuerdo de Escazú

F. Gobernanza para la implementación del Acuerdo de Escazú		
F.1. Formalización del Gabinete Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú y puesta en marcha del sistema de gobernanza. Objetivo: ejecutar las acciones del plan y dar seguimiento a los avances en el cumplimiento efectivo del Acuerdo de Escazú en la Argentina. Cantidad de acciones: tres		
Acciones	Indicadores	Área/s responsable/s
<p>F.1.1. Formalizar el Gabinete Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú (GNIAE) mediante un acto administrativo.</p> <p>F.1.2. Consolidar un diseño definitivo del sistema de gobernanza para la implementación y seguimiento del cumplimiento efectivo del Acuerdo de Escazú¹⁰.</p> <p>F.1.3 Poner en marcha el sistema de gobernanza y consensuar sus modos de funcionamiento.</p>	<p>Acto administrativo de formalización del Gabinete.</p> <p>Acto administrativo y publicación del reglamento del sistema de gobernanza.</p>	<p>Gabinete de Implementación del Acuerdo de Escazú</p>

10. En el documento Propuestas Ciudadanas para la Implementación del Acuerdo de Escazú: resultados de la estrategia de participación 2023 se han registrado más de 100 aportes y sugerencias de múltiples actores y sectores para el diseño y puesta en marcha de este sistema.

Gobernanza para la implementación del Acuerdo de Escazú

Gobernanza para la implementación del Acuerdo de Escazú

El objetivo del presente capítulo es entregar una propuesta de gobernanza para la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú en Argentina. De este modo, se presenta el **Gabinete Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú** como mecanismo de coordinación y articulación interna entre las entidades públicas titulares de obligaciones, es decir, aquellas que tienen a su cargo la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información pública ambiental, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como las disposiciones relacionadas a las defensoras y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1 del Acuerdo de Escazú.

Para comprender las obligaciones del sector público, ante todo, es necesario observar el sistema de competencias establecido en la Constitución Nacional. La competencia en materia ambiental se da en un marco de federalismo de concertación y de facultades concurrentes. Esto quiere decir, por un lado, que el Estado nacional puede dictar normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental, a modo de principios rectores que aseguran que en todo el territorio nacional se alcance un cierto nivel de protección. Por otro lado, las jurisdicciones tienen la potestad de dictar normas complementarias para definir el uso y gestión de los recursos naturales que se encuentren en su territorio, siempre respetando los presupuestos mínimos o superándolos. Esto se presenta como uno de los principales desafíos para la implementación del Acuerdo y se diferencia notablemente de aquellos países que poseen un estado unitario. Así, el sistema federal de gobierno implica que:

- ▶ El Acuerdo de Escazú es una norma de carácter supralegal, por medio del cual se asumen responsabilidades internacionales, que resulta aplicable al conjunto de las jurisdicciones que integran el país.
- ▶ El Gobierno nacional cuenta con competencias que le son propias en materia ambiental y otras que surgen de las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental, al igual que las jurisdicciones locales.
- ▶ De acuerdo al sistema federal ambiental, los distintos niveles de gobierno operan de acuerdo a los principios de concurrencia y complementariedad.
- ▶ De conformidad a lo dispuesto por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por la Argentina, el Estado nacional y los provinciales son garantes en la protección integral de los derechos humanos.
- ▶ Deberá observarse el sistema judicial establecido por la Constitución Nacional, conformado por la jurisdicción federal y las jurisdicciones subnacionales, de acuerdo con las competencias ordinarias.

Por su parte, el **sistema de gobernanza** permitirá a los diversos actores de la sociedad civil,

académica, el sector privado, organizaciones locales y otros, vincularse activamente con el GNIAE, relacionarse con las entidades públicas responsables del cumplimiento de las disposiciones del acuerdo, e involucrarse en la ejecución y el seguimiento de las acciones para su implementación progresiva pero efectiva.

Gabinete Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú

Se trata de un mecanismo por medio del cual se coordinan y articulan los actores públicos titulares de las obligaciones establecidas por el Acuerdo de Escazú. La primera tarea para definir su conformación ha sido identificar a estos titulares de obligaciones, entendidos como aquellos órganos, autoridades o entidades cuyas atribuciones legales y competencias primarias se relacionan al menos con uno de los pilares sustantivos del Acuerdo: información, participación, justicia, defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y fortalecimiento de capacidades. Se aclara que para la identificación de los titulares de obligaciones se han priorizado los primeros cuatro pilares, por considerarse que el último opera de manera transversal.

La propuesta diseñada por la SCCDSel toma como modelo el marco institucional y los mecanismos en pleno funcionamiento del Gabinete Nacional de Cambio Climático¹¹, que resultan un buen punto de partida para el desarrollo de esta coordinación. En este sentido, se prevé un sistema de carácter nacional, encabezado por la Jefatura de Gabinete de Ministros, coordinado por la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación e integrado por puntos focales de cada uno de los organismos que lo componen, que serán analizados en el presente apartado.

El Gabinete Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú organiza a los titulares de obligaciones en dos grupos diferenciados: **grupo estratégico o ejecutivo** y **grupo amplio**. Esta organización en dos grupos se fundamenta en que las atribuciones legales y competencias vinculadas a los pilares del acuerdo de los diferentes órganos, autoridades y entidades no son las mismas. A continuación, se presentan aquellos actores públicos identificados para integrar tanto el grupo amplio como el estratégico.

El **grupo estratégico o ejecutivo** está inicialmente conformado por las instituciones del Poder Ejecutivo Nacional cuyas atribuciones legales se vinculan al menos con dos pilares sustantivos del Acuerdo de Escazú o cuyas competencias sean clave para la implementación de alguno de los pilares del acuerdo. Este grupo se puso en marcha en el mes de julio de 2023, con la siguiente conformación: Jefatura de Gabinete de Ministros; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Ministerio del Interior; Secretaría de Innovación Pública; Secretaría de Asuntos Estratégicos y Agencia de Acceso a la Información Pública. Posteriormente, se planea sumar a este grupo la representación del Poder Legislativo, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo de la Nación.

El **grupo amplio** estará integrado por el grupo estratégico y por las instituciones, dependencias y organismos cuyas atribuciones legales se vinculen al menos con un pilar sustantivo del

11. Disponible [en línea]: www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/gabinete-nacional

Acuerdo de Escazú o que cuenten con competencias vinculadas a la materia ambiental. Tales son los casos, por ejemplo, de los Ministerios nacionales de Economía, Ministerio de Transporte y de Obras Públicas, entre otros. Asimismo, se identificó que del universo total de Organismos Desconcentrados y Descentralizados¹² habría al menos 24 organismos¹³ que ofrecen servicios públicos que pueden afectar significativamente el ambiente, la administración de los recursos naturales o bien se vinculan de manera directa con algún pilar sustantivo del Acuerdo de Escazú. Se propone que formen parte del grupo amplio y que progresivamente se puedan integrar otros organismos de estas características a la implementación del Acuerdo de Escazú.

El gabinete tendrá un alcance nacional, mientras que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán establecer los mecanismos institucionales que estimen necesarios a efectos de llevar a cabo la implementación de las obligaciones que emanan del Acuerdo de Escazú. De todas maneras, y tal como se plasma en el **eje E. Creación y fortalecimiento de capacidades** del presente plan, se establecerán mecanismos de articulación y acompañamiento técnico con las 24 jurisdicciones, tarea que estará a cargo del grupo estratégico o ejecutivo.

Sistema de gobernanza

Uno de los desafíos de la implementación del Acuerdo de Escazú es crear e implementar un sistema de gobernanza que permita a los diversos actores de la sociedad civil, académica, el sector privado, organizaciones locales y otros relacionarse con las entidades públicas responsables del cumplimiento de sus disposiciones. Así, se propone un esquema basado en reconocer que una mayor interacción entre estos actores conlleva la posibilidad de elaborar propuestas para la implementación de los objetivos que promueve el Acuerdo de Escazú de una forma más transparente, informada y participativa.

El sistema de gobernanza se concibe como un espacio de diálogo y colaboración entre actores públicos y no públicos para la toma de decisiones incidentes. Toma como modelo el sistema establecido en la Mesa Nacional de Gobierno Abierto¹⁴ con una conformación equilibrada entre representantes del Gobierno y de organizaciones de los sectores social, académico y privado. El

12. La Administración Pública Nacional comprende además de la Administración Centralizada, un total de 212 (Doscientos doce) Organismos Desconcentrados, Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social, que integran el Sector Público Nacional junto a las Sociedades y Empresas del Estado, Sociedades de Economía Mixta y Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria, Fondos Fiduciarios, Entes Públicos con autarquía financiera y las Entidades Públicas no estatales donde el Estado Nacional tiene control mayoritario del patrimonio o de las decisiones. La información detallada de las competencias de cada uno de estos organismos se encuentra disponible en la web: mapadeleestado.jefatura.gob.ar/organismos.php

13. Estas veinticuatro dependencias, que incluyen organismos descentralizados, entes reguladores y empresas de servicios públicos identificados son: 1-Administración de Parques Nacionales (APN); 2-Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR); 3-Administración General de Puertos S.E. (AGP); 4-Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (ADIFSE); 5-Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA); 6-Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN); 7-Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH); 8-Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); 9-Dirección Nacional de Vialidad (DNV); 10-Energía Argentina S.A. (IEASA); 11-Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE); 12-Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS); 13-Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA); 14-Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS); 15-Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); 16-Instituto Nacional del Agua (INA); 17-Instituto Nacional de Semillas (INASE); 18-Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP); 19-Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); 20-Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA); 21-Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP); 22-Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA); 23-Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); 24-YPF S.A. e YPF Gas S.A.

14. Disponible [en línea]: www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/servicios-y-pais-digital/gobierno-abierto/mesa-nacional-de-gobierno

mismo estará encabezado por la Jefatura de Gabinete de Ministros y coordinado por la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación.

Se proponen entre sus objetivos:

- ▶ participar activamente en la elaboración del Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú y en las acciones y estrategias de fortalecimiento de capacidades;
- ▶ elaborar recomendaciones para la ejecución de los programas, proyectos o acciones dispuestas en el plan, así como en las acciones y estrategias para el fortalecimiento de capacidades;
- ▶ servir de canal de información entre sus miembros y sus redes de contacto, y
- ▶ difundir el Acuerdo de Escazú y sus contenidos en forma permanente.

El sistema de gobernanza se plantea entonces como el marco estratégico y operativo para la participación y la interacción entre los diversos actores y sectores que es necesario y deseable que se involucren en el proceso de implementación del Acuerdo de Escazú. Esta propuesta deberá ser consensuada entre las entidades públicas, con la participación activa de los sectores social, académico y privado.

Para la conformación de categorías de actores sociales, académicos y privados se ha considerado la implementación de Ley n.º 27520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global y su Decreto Reglamentario n.º 1030/2020, como antecedente de participación en el ámbito de competencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. En particular, se han usado como referencia las categorías establecidas para la conformación del Consejo Asesor Externo del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.

A su vez, como se mencionó anteriormente, el sistema toma como antecedente a la Mesa Nacional de Gobierno Abierto (Resolución 132/2018), cuyas y cuyos representantes se nuclean en la *Red de Organizaciones de la Sociedad Civil para el Estado Abierto*. En esta identificación, acorde a los estándares del Acuerdo de Escazú, se ha prestado especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, que corren más riesgo de sufrir daños ambientales o tienen más dificultades para ejercer sus derechos de acceso.

En este sentido, se proponen inicialmente las siguientes categorías de actores¹⁵ para la conformación del sistema de gobernanza:

- ▶ **Organizaciones socioambientales con personería jurídica:** incluye organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones civiles, tanto ambientales como de

15. A nivel metodológico, para la conformación de las categorías de actores sociales y del sector privado se ha considerado la Ley n.º 27520 y su Decreto Reglamentario n.º 1030/2020, como antecedente de participación de la sociedad civil en el ámbito de competencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en particular las categorías establecidas para la conformación del Consejo Asesor Externo. A su vez, se ha tomado también como antecedente la **Mesa Nacional de Gobierno Abierto** (Resolución 132/2018), cuyos representantes se nuclean en la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil para el Estado Abierto. La inclusión de la categoría Organizaciones sin personería jurídica es fruto tanto del mapeo de actores como de los resultados del proceso participativo, donde numerosos asistentes han identificado barreras al acceso a la información y la participación por no estar conformados formalmente. A su vez, la categoría “agrupaciones de periodistas”, responde a que en la región se trata de un grupo que es necesario proteger en su calidad de defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

derechos humanos, constituidas legalmente y reguladas por el Código Civil y Comercial de la Nación.

- ▶ **Organizaciones socioambientales sin personería jurídica:** incluye asambleas, agrupaciones locales, redes, colectivos autoconvocados u otras organizaciones sin personería jurídica con incidencia en la defensa de temas socioambientales y de derechos humanos en un ámbito territorial determinado.
- ▶ **Organizaciones de la economía popular:** incluye cooperativas y asociaciones de la economía social y solidaria con incumbencia en temas ambientales.
- ▶ **Comunidades Indígenas y organizaciones de Pueblos Indígenas:** incluye comunidades registradas en Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.), así como sus organizaciones y redes de representación.
- ▶ **Academia:** identifica a actores de la comunidad científica, centros e institutos de investigación, universidades, entidades académicas y colegios profesionales.
- ▶ **Entidades empresariales:** incluye cámaras empresariales, consejos y asociaciones del sector privado, cuyo accionar se orienta al desarrollo sostenible y a la protección de los derechos humanos.
- ▶ **Asociaciones de periodistas:** incluye organizaciones que agrupen periodistas y profesionales especializados en temas ambientales y sociales.
- ▶ **Sindicatos:** incluye entidades sindicales registradas en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que puedan tener vinculación con los actores del sector público definidos para el grupo amplio.

Se entiende que la convergencia de una multiplicidad de sectores en un mismo sistema y bajo un mismo objetivo posibilitará el establecimiento de diálogos, alianzas y estrategias que, más allá de los resultados que se obtengan, permitirán fortalecer la agenda de la sostenibilidad ambiental y el ejercicio de los derechos de acceso. Así es cómo este sistema permitirá que los actores públicos puedan establecer un diseño de estrategias con una mirada multisectorial y, a su vez, que los actores sociales, académicos y privados conozcan las normas y los procesos de gestión de las entidades públicas.

Algunos lineamientos para el funcionamiento del sistema se fundamentan en los principios que promueve el Acuerdo de Escazú, debiendo operar bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, máxima publicidad y equidad intergeneracional. Para esto, se propone un sistema reglado de los procesos de toma de decisiones que deberá ser plasmado en un reglamento particular que formará parte de las normas que dispongan la creación y funcionamiento del sistema.

Como mínimo, la participación deseada deberá establecer un nivel “incidente”, es decir, que pueda tener influencia directa sobre la toma de decisiones. En tal sentido, se espera que el sistema de gobernanza no actúe o sea considerado un mecanismo de consulta o una instancia de carácter técnico que brinde asesoramiento u opiniones, sino que las decisiones que se adopten sean ejecutadas luego por las autoridades competentes en la implementación del acuerdo, sin perjuicio de que pueda operar en casos puntuales, como una instancia de consulta.

De esta forma, se propone la creación de un sistema basado en la cooperación y colaboración entre diversos actores públicos, sociales, académicos y privados, que compartan propuestas, opiniones y prácticas, de manera de aprovechar las sinergias y perspectivas para abordar el Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú en Argentina y su posterior seguimiento. Para esto, se propone que las decisiones se adopten por **consenso** entre sus integrantes y, en el caso de no lograrlo, se realicen por mayoría. De esta forma, todas y todos sus integrantes tendrán el mismo nivel de incidencia en las decisiones a abordar.

El sistema de gobernanza deberá cumplir con dos requisitos fundamentales: el primero es que deberá lograr cierto grado de legitimidad entre sus integrantes y la comunidad de personas y organizaciones que se relacionen con el Acuerdo de Escazú; el segundo es que deberá contar con un mecanismo de funcionamiento que sea lo suficientemente efectivo como para garantizar la gobernabilidad del sistema y la toma de decisiones que luego puedan implementarse.

A tales efectos, se propone que el sistema cuente con una **Mesa Nacional de Representantes** (o el nombre que adopte en el futuro) integrada por igual número de miembros del sector público (Gabinete Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú) y del sector social, académico y privado (que elijan a sus representantes de conformidad a los lineamientos que oportunamente se dispongan).

- **Sector público:** ocho representantes titulares, provenientes del Grupo Estratégico, que contarán con un representante por cada uno de los ministerios, instituciones y poderes que lo componen. Los actores del sector público contarán únicamente con un representante titular.
- **Sector social y privado:** ocho representantes titulares y ocho representantes suplentes. Se sugiere que, a diferencia del sector público, los sectores social, académico y privado cuenten cada uno con un representante titular y un representante suplente.

Para un adecuado funcionamiento del sistema, será necesario prever una representación equilibrada de actores de alcance nacional y provincial, en forma sugerida como resultado del proceso participativo, mediante una **representación regional**.

A fin de brindar legitimidad a la hora de convocar a los actores, se propone un **llamado abierto** a inscribirse para integrar el espacio con proceso de autodefinición de representantes. Es decir, que no exista un proceso de selección, sino de validación de la inscripción realizada, donde la autoridad convocante tendrá a su cargo chequear y validar que la inscripción efectuada coincida con el objeto de la convocatoria y que la representación invocada resulte válida. Una vez aceptadas, las organizaciones pasarán a integrar un registro que será público, donde constará que son parte del sistema de gobernanza.

En relación con la **duración de los mandatos**, siguiendo el criterio establecido por la Mesa Nacional de Gobierno Abierto, se sugiere que las y los integrantes de la Mesa Nacional de Representantes desempeñen sus funciones ad honorem y sean designadas y designados por un período de dos años, tras los cuales podrían recibir una redesignación por nuevos períodos.

Propuesta de obligaciones y atribuciones de los miembros de la Mesa Nacional de Representantes:

- ▶ Actuar en cumplimiento del reglamento interno que se dicte oportunamente.
- ▶ Participar en la totalidad de las reuniones.
- ▶ Promover la inclusión de temas a discutir en el orden del día de cada reunión de la Mesa Nacional de Representantes.
- ▶ Informar un medio de contacto para recibir comunicaciones relevantes sobre el proceso.
- ▶ Sugerir fechas y convocatorias para las siguientes reuniones de la Mesa Nacional de Representantes.
- ▶ Colaborar en actividades de difusión y en convocatorias amplias a organizaciones sociales y del sector privado, para involucrarlas en el proceso de implementación y fortalecimiento de capacidades del Acuerdo de Escazú.

Consideraciones finales

Consideraciones finales

El presente plan propone lineamientos y acciones que necesariamente tienden puentes entre dos ciclos de gestión gubernamental. Se espera que los esfuerzos sostenidos realizados entre 2021 y 2023 tengan continuidad en la planificación pública, que sean considerados como políticas de Estado prioritarias, en el marco del compromiso asumido como país desde y para la región. A estos efectos, es fundamental el involucramiento del Gabinete Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú, a través sus puntos focales técnicos, de modo de generar un nodo de personas e instituciones que se apropien de la agenda del Acuerdo de Escazú y se movilicen por su efectiva implementación en el corto y mediano plazo.

Asimismo, las personas y organizaciones de la sociedad civil, redes, asociaciones y demás instituciones que han sido parte de la estrategia de participación pública para la elaboración del plan son actores indispensables respecto de promover la movilización de recursos y ampliar la base de consensos requeridos para el ejercicio activo de los derechos de acceso en asuntos ambientales.

Tanto para la elaboración del plan como para su seguimiento es necesario el compromiso activo de funcionarias y funcionarios que lideren sus acciones, así como el acompañamiento de la ciudadanía en un proyecto de país que garantice y consolide los derechos humanos en asuntos ambientales, en pos de una democracia ambiental federal, abierta e inclusiva.

Agradecimientos

Agradecimientos

El Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú es el resultado del trabajo mancomunado de un importante número de actores provenientes de diversos sectores, sin cuyas contribuciones esta formulación no habría sido posible.

La Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación (SCCDSel), en tanto punto focal del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, desea agradecer a:

- ▶ las y los representantes de organizaciones socioambientales, sindicatos, universidades, entidades académicas y empresariales y público general que, a través de las diferentes instancias y dispositivos de participación, han construido de manera colaborativa el presente plan;
- ▶ las autoridades y equipos técnicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de las áreas y organismos que conforman el Gabinete Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú, por su involucramiento y compromiso en la construcción y revisión del plan: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Secretaría de Innovación Pública, Secretaría de Asuntos Estratégicos, Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública;
- ▶ el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, por sus aportes;
- ▶ las autoridades y los equipos de los siguientes Gobiernos provinciales, por su apoyo en la organización y realización de las mesas de diálogo regionales: Dirección de Cambio Climático, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente del Gobierno de la provincia de La Pampa; Dirección de Medio Ambiente, dependiente de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Gobierno de la provincia de Tucumán, Dirección Provincial de Educación y Participación Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Política Ambiental del Ministerio de Ambiente del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Subsecretaría de Gestión, Desarrollo Sostenible e Innovación, dependiente de la Secretaría de Estado de Cambio Climático del Gobierno de la provincia de Misiones, y
- ▶ los equipos de la Dirección Nacional de Evaluación Ambiental y del Gabinete Nacional de Cambio Climático, por la facilitación de los diferentes espacios que hicieron posible materializar la estrategia de participación.

Finalmente, la SCCDSel agradece la colaboración de los siguientes fondos, organismos e iniciativas, que apoyaron técnica y financieramente las distintas etapas de formulación del plan: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD Argentina), Alianza para la Acción hacia una Economía Verde (PAGE) y Fondo Fiduciario de Derechos Humanos, Inclusión y Empoderamiento del Banco Mundial.

Siglas y acrónimos

Siglas y acrónimos

APN: Administración Pública Nacional

CAJ: Centros de Acceso a la Justicia

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CIAM: Centro de Información Ambiental

CNV: Comisión Nacional de Valores

COP: Conferencia de las Partes
(Conference of the Parties)

EAE: Evaluación Ambiental Estratégica

EIA: Evaluación de Impacto Ambiental

EsIA: Estudio de Impacto Ambiental

GNIAE: Gabinete Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú

MAyDS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

RETC: Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

SCCDSel: Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación

SINAGIR: Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo

SINIA: Sistema Integrado de Información Ambiental

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PAGE: Alianza para la Acción hacia una Economía Verde (Partnership for Action on Green Economy)

Bibliografía

Bibliografía

Administración de Parques Nacionales.

(2022). "La Consulta Previa, Libre e Informada a Comunidades Indígenas en Áreas Protegidas Nacionales", publicada por Dirección Nacional de Conservación- Coordinación de Pobladores y Comunidades.

Argentina, Jefatura de Gabinete de

Ministros. (2022). *Quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2022-2024* [en línea] <https://nube.innovacion.gob.ar/s/iiPkGMRPppScXsj>

Barchiche, D., Hege, E., Napoli, A. (2019). "El Acuerdo de Escazú: ¿un ejemplo ambicioso de tratado multilateral a favor del derecho ambiental?" IDDRI, Issue Brief N°03/19.

Comisión Económica para América Latina

y el Caribe. (2021). *Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.* (LC/PUB.2018/8/Rev.1).

Comisión Económica para América Latina

y el Caribe. (2022). *Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Guía de implementación.* (LC/TS.2021/221/Rev.1).

Comisión Económica para América Latina y el Caribe y Gobierno del Ecuador.

(2023). *Ruta para la implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe en el Ecuador* (LC/TS.2023/41).

Fidyka, L. (2009). "Participación Ciudadana. Una aproximación desde el marco constitucional de la República Argentina". Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad, Ministerio del Interior, República Argentina.

Klinsberg, Bernardo. (1999). "Seis Tesis No convencionales sobre participación", Centro de Documentación de Políticas Sociales, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

(2019). *Guía para fortalecer la participación pública y la evaluación de los impactos sociales.* Publicado por la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

(2021). *Manual técnico para la consulta a pueblos originarios en la gestión de bosques y cambio climático: Lineamientos sobre el proceso de consulta previa, libre e informada a Pueblos Originarios. Herramientas para la implementación de las salvaguardas de REDD+ en el terreno.*

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

(2022). *Informe de cierre de la Consulta pública Implementación del Acuerdo de Escazú en Argentina.*

Naser, A., Fideleff, V., & Tognoli, J.

(2020). *Gestión de planes de acción locales de gobierno abierto: herramientas para la cocreación, el seguimiento y la evaluación.* Documentos de Proyectos (LC/TS.2020/78), Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Naser, A., Williner, A., & Sandoval, C.

(2021). *Participación ciudadana en los asuntos públicos: un elemento estratégico para la Agenda 2030 y el gobierno abierto.* Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Robirosa, M.

(2014). *Turbulencia y gestión planificada. Principios de planificación participativa social, territorial y organizacional.* Eudeba.

Sandoval, C., Sanhueza, A., & Williner, A.

(2015). *La planificación participativa para lograr un cambio estructural con igualdad.* (LC/IP/L.342/Rev.1).



Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible
Argentina